



Departamento de Ciencias Sociales
Maestría en Administración y Políticas Públicas

TESIS DE MAESTRÍA

Voto económico y atribución de responsabilidades: Evidencia de las provincias argentinas (1983-2019)

Alumno: Federico Lombisano

Director: Germán Feierherd

Codirector: Iván Seira

Índice

I.	<i>Introducción</i>	5
II.	<i>Voto económico</i>	8
	a. Teoría clásica	8
	b. ‘La economía’ para los votantes	9
	c. ¿Pasado o futuro? ¿Individual o colectivo?	11
	d. Otras dimensiones	13
	e. En Argentina	14
	f. Atribución de responsabilidades	15
III.	<i>Selección de caso: Argentina</i>	20
	a. Federalismo y descentralización	20
	b. Los gobernadores	23
	c. Sistema electoral	25
	d. Régimen fiscal y estructura productiva	27
IV.	<i>Marco metodológico</i>	30
	a. Hipótesis	30
	b. Datos	31
	c. Variable dependiente	31
	d. Variable independiente principal	31
	e. Variables moderadoras	32
	f. Variables de control	33
	g. Estrategia y modelos	37
	h. Estadística descriptiva	38
V.	<i>Resultados</i>	44
VI.	<i>Conclusión</i>	48
VII.	<i>Bibliografía</i>	52
VIII.	<i>Fuentes</i>	59
IX.	<i>Anexo</i>	61

Tablas y figuras

Figura 1: provincias por tipo de economía y peso del Estado	36
Figura 2: histograma de ingresos por provinciales	39
Figura 3: histograma de tasas de desempleo provinciales	39
Figura 4: histograma de crecimiento económico provincial en la economía	40
Figura 5: histograma de peso del Estado provincial	40
Figura 6: diagrama de cajas de ingresos por provincia	41
Figura 7: diagrama de cajas de desempleo por provincia	41
Figura 8: diagrama de cajas de crecimiento económico por provincia	42
Figura 9: diagrama de cajas de peso del Estado provincial en la economía	42
Figura 10: matriz de correlación	43
Tabla 1: modelos OLS con efectos fijos (H1, H2, H3)	44
Tabla 2: modelos OLS con efectos aleatorios (H1, H2, H3)	45
Tabla 3: modelos OLS con efectos fijos (H4)	46
Tabla 4: modelos OLS con efectos aleatorios (H4)	47

Resumen

¿Cómo y cuánto afecta la evolución de la situación económica al desempeño electoral de los gobernadores y sus partidos? Opuesto a lo que sucede a escala nacional, a nivel subnacional el mecanismo de selección por desempeño económico encuentra resultados divididos. Este trabajo estudia el caso de Argentina, un país con constantes problemas económicos organizado bajo un sistema federal donde las provincias tienen gran responsabilidad y autonomía sobre el diseño y ejecución de las políticas y el gasto público. Los resultados indican que el voto económico retrospectivo es bastante débil como mecanismo de rendición de cuentas a nivel subnacional, y que los gobernadores son casi inmunes al deterioro de la macroeconomía nacional –en contraste con hallazgos anteriores. Esto resulta alarmante puesto que los gobernadores no tienen ningún incentivo electoral para gestionar la economía provincial de manera eficiente, lo cual podría empeorar la calidad de vida de las personas al mismo tiempo que logran reelegirse –un escenario que socava la representación democrática. También es probable que los votantes encuentren grandes dificultades a la hora de evaluar la economía local de manera tal que aumente la rendición de cuentas electoral, y posible que midan la competencia de los funcionarios subnacionales de forma que nada tiene que ver con la economía.

Palabras clave: *elecciones subnacionales, voto económico, rendición electoral, errores de atribución, federalismo.*

Abstract

To what extent does the evolution of the economic situation affect the electoral performance of governors and their parties? Contrary to what happens at the national level, in the subnational scene the mechanism of selection by economic performance finds mixed results. This paper studies the case of Argentina, a country that is in constant economic struggle organized under a federal system where provinces have great responsibility and autonomy in the design and execution of public policy and spending. Findings are that retrospective economic voting as a mechanism that enhances vertical accountability at the subnational level is quite weak, and that governors are almost immune to national macroeconomic mismanagement –in contrast with previous findings. These results are alarming considering that governors do not have enough electoral incentives to manage the provincial economy efficiently, which could worsen the people's quality of life at the same time they get reelected –a scenario that undermines democratic representation. It is also probable that voters face important challenges when assessing local economic conditions in a way that strengthens electoral accountability, and possible that they evaluate the competence of subnational officials through other ways that have nothing to do with the economy.

Keywords: *subnational elections, economic voting, electoral accountability, misattribution, federalism*

I) Introducción

Cuando uno piense en la economía debe pensar en las elecciones, y cuando uno piense en elecciones debe pensar en la economía (Tufte, 1978). Este trabajo parte de esa premisa que, aunque forma parte la creencia generalizada y fue ampliamente corroborada por la academia para el nivel nacional, en las arenas subnacionales no es tan clara. Una parte de la literatura postula que los votantes no separan responsabilidades entre niveles de gobierno y que el apoyo electoral a los gobernadores depende fuertemente de la evaluación que hacen los votantes de la situación económica nacional (Peltzman, 1987; Holbrook, 1987; Simon 1989; Stein 1990; Simon, Ostrom & Marra, 1991; Kone & Winters, 1993; Jerome & Lewis-Beck, 1999; Jerome & Speziari, 2000)¹. Otra parte encuentra que los votantes juzgan a los gobernadores de forma parecida que a los presidentes: de manera retrospectiva en base al desempeño de la economía provincial, posicionando al voto económico como un mecanismo de rendición de cuentas efectivo a nivel subnacional (Adams & Kenny, 1989; Howell & Vanderleeuw, 1990; Niemi, Stanley & Vogel, 1995; Partin, 1995; Svoboda, 1995; Carsey & Wright, 1998; Lowry, Alt & Ferree, 1998; Hansen, 1999; Riba & Díaz, 2003; King & Cohen, 2005; Warshaw, 2017).

La relación entre federalismo, economía y rendición de cuentas electoral es un tema actual, relevante y con varias preguntas pendientes –especialmente en países donde la situación económica es más volátil, el escenario político más inestable y la atribución de responsabilidades del electorado hacia sus gobernantes más intrincada como en los de Latinoamérica. En estos contextos, la evaluación del desempeño económico es un atajo clave para distinguir funcionarios competentes y producir gobiernos representativos a través de elecciones ¿Cómo y cuánto afecta la evolución de la situación económica nacional y subnacional el desempeño electoral de los gobernadores latinoamericanos y sus partidos? ¿Qué tan bien funciona el voto económico como mecanismo de selección de candidatos competentes? ¿Cuáles son los aspectos de la economía que mira el electorado? ¿Existen diferencias de comportamiento entre subunidades con características políticas, geográficas y productivas diferentes?

La atribución de responsabilidades –incluidas las económicas– a nivel subnacional en América Latina es un campo poco explorado. En Brasil, Barberia, Avelino y Zanlorenssi (2019) encuentran evidencia de la existencia de voto económico subnacional, aunque el mismo se encuentre moderado por otras variables como la estructura de la economía estatal y el grado autonomía del gobierno central. Demuestran que los

¹ La literatura define a este fenómeno como *referendum voting*: tanto los candidatos nacionales como subnacionales dependen de la performance del gobierno nacional. Siguiendo esta línea, aquellos candidatos alineados con el oficialismo nacional deberían recibir un fuerte apoyo cuando la situación de la economía nacional sea buena, independientemente de que la performance de su provincia sea mala; y ser castigados cuando la economía nacional se deteriora sin importar que hayan hecho un buen trabajo en su provincia.

votantes responsabilizan más fuertemente al gobernador en estados con mayor capacidad de financiamiento propio y donde predominan la industria y los servicios por sobre la agricultura y la materia prima, y viceversa. Estos resultados van de la mano con los que Ebeid y Rodden (2006) obtuvieron para el caso norteamericano: “hay recompensas electorales para aquellos gobernadores que mejoran la economía estatal” (pp. 20), pero existen variables intervinientes.

En Argentina, Remmer y Gélinau (2003) y Gélinau y Remmer (2006) encuentran que el voto económico subnacional se basa fuertemente en el modelo de *referendum voting*, aunque los gobernadores tienen algún tipo de incentivo para controlar el gasto y manejar correctamente la economía provincial ya que existe cierto nivel –bastante bajo– de *accountability* electoral si no lo hacen. Además, encuentran evidencia de que la evaluación de la economía local afecta el apoyo al candidato presidencial en esa provincia cuando ambos funcionarios comparten color político, fenómeno que se conoce como *reverse coattails* y demuestra la importancia de las alianzas electorales entre el gobierno central y las administraciones subnacionales. Desde los trabajos de Remmer y Gélinau (2003) y Gélinau y Remmer (2006) –que estudian los períodos 1983-1999 y 1983-2001 respectivamente– ningún trabajo publicado se dedicó a estudiar las consecuencias del manejo económico en los resultados electorales en las provincias argentinas². Esto significa casi veinte años de vacío o de falta de continuidad en la literatura sobre el tema, lo cual podría deberse a que la academia confía en que estos resultados continúan inalterados o que simplemente se priorizaron otros temas de investigación.

En Argentina los gobernadores son personas poderosas y las provincias tienen gran autonomía y responsabilidad sobre la ejecución del gasto público. De esta manera, los resultados de la competencia electoral a nivel subnacional son importantes para la calidad de vida de las personas (Gervasoni, 2021). Desde fines de los 90s y principio de los 00s Argentina reformó su constitución³, entró y salió de una crisis económica grave, se disolvieron y surgieron nuevos partidos y alianzas políticas, se polarizó el escenario electoral y se introdujeron reformas importantes sobre normativa –como la introducción de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el calendario electoral en 2011. Al mismo tiempo, los partidos políticos en Argentina se han tornado altamente inconsistentes: ya no tienen una identidad sólida y definida a lo largo del tiempo y desilusionan constantemente al electorado al incumplir

² Solo Ledesma (2020) encuentra que la evolución de la situación económica nacional afecta la performance electoral de los oficialismos provinciales “tanto a través de mala atribución de responsabilidades como por efecto derrame” (pp. 2), y si se han estudiado en Argentina el voto económico nacional (ver *En Argentina en el Marco conceptual*), federalismo fiscal, sistemas de partidos y regímenes subnacionales (Tommasi, Saiegh & Sanguinetti, 2001; Leiras, 2006, 2007; Gervasoni, 2011a, 2011b; Ardanaz, Leiras & Tommasi, 2014).

³ La reforma constitucional de 1994 no solo culminó el proceso de descentralización en Argentina (Falleti, 2010) sino que también hizo cambios importantes sobre el sistema electoral y las facultades de los distintos niveles de gobierno, incluidas las provincias.

promesas de campaña –incluidas las soluciones a los problemas económicos de la gente. Ante esto, evaluar el desempeño económico es una buena opción para que [no solo] los votantes desinformados, desinteresados, o confundidos puedan distinguir a los funcionarios competentes de los incompetentes.

Este trabajo pone a prueba las dos hipótesis principales en el campo –*referendum voting* y *economic voting* (Atkeson & Partin, 1995)– e incorpora nuevas ideas que permiten captar el efecto diferencial de la estructura económica de las provincias argentinas al mismo tiempo que actualiza los resultados ampliando el periodo de estudio hasta las elecciones de 2019 inclusive. Cuantificar el costo de los malos resultados y del buen manejo económico en las provincias argentinas ayudaría a dimensionar los incentivos que tienen los gobernadores a la hora de manejar los costos y beneficios de diseñar e implementar una política económica responsable –o de no hacerlo.

Utilizando datos económicos y electorales de Argentina a nivel nacional y provincial (1983-2019) y modelos de regresión lineal, este trabajo encuentra que en Argentina el voto económico retrospectivo como mecanismo de rendición de cuentas electoral y selección de candidatos competentes a nivel subnacional es, en general, muy débil. En particular no se encuentra evidencia de que el tipo de estructura económica funcione como variable mediadora del voto económico subnacional, pero si algún indicio de que voto económico funciona de manera distinta en provincias donde el peso del Estado provincial en la economía es bajo en comparación con aquellas donde es alto. Los resultados son relevantes para la literatura sobre comportamiento electoral subnacional, voto económico y atribución de responsabilidades en países federales en desarrollo.

El texto se divide en seis secciones. Las próximas dos componen el marco conceptual del trabajo: primero se enfoca en la literatura previa sobre voto económico y atribución de responsabilidades, y después precisa sobre las implicancias políticas de las diferencias institucionales y productivas dentro del sistema federal argentino. La cuarta sección detalla el marco metodológico, incluyendo estadística descriptiva, formulación de hipótesis, recolección de datos, construcción de variables e indicadores y explicación y justificación de los modelos estadísticos. La quinta sección presenta los resultados y la sexta concluye y discute posibles maneras de continuar con esta agenda de investigación.

II) Voto económico

Teoría clásica

En *Una Teoría Económica de la Democracia* (1957), Downs sugiere que de la misma manera que cualquier agente del mercado de trabajo cumple con un motivo social motivado por un beneficio personal, “los partidos políticos en democracia formulan políticas estrictamente como un medio para conseguir votos, y no buscan votos con el objetivo de llevar a cabo sus políticas preconcebidas ... por tanto su función social es producto de sus motivos personales” (pp. 137). Esta teoría de racionalidad en la toma de decisiones políticas fue el faro de la primera oleada de investigaciones sobre voto económico durante los 60s y 70s en Estados Unidos e Inglaterra, que la “redujo en las décadas subsiguientes hacia la siguiente idea operacional ... la *Responsibility Hypothesis*” (Nannestad & Paldam, 1994; pp. 215): los votantes responsabilizan a los gobiernos por el desarrollo económico.

A partir del libro *The American Voter* (Campbell *et al*, 1960) la literatura atribuye una buena parte de los resultados electorales a las condiciones económicas⁴. Según el *Modelo de Michigan* (Campbell *et al*, 1960), las fuerzas que definen la selección del voto combinan variables de largo y corto plazo que operan a través de un embudo de causalidad (*funnel of causality*). En Latinoamérica, el embudo incluye los determinantes débiles sobre la selección del voto al comienzo –características demográficas y socioeconómicas, identificación partidaria e ideología– y los determinantes fuertes como la economía en la punta⁵ (Nadeau *et al*, 2018).

Tal como el eslogan de la campaña de Bill Clinton en 1992 –*it's the economy, stupid*– la literatura sugiere que “el apoyo del gobierno se reducirá como consecuencia de los malos tiempos económicos y se reforzará por los buenos” (Nadeau *et al*, 2015; pp. 236). El estado de la economía es una cuestión de valencia pura (Stokes, 1963), es decir que tanto candidatos y funcionarios como “todos los ciudadanos acuerdan con el objetivo de obtener buenos resultados económicos” (Nadeau *et al*, 2015; pp. 236). Esta teoría clásica (Lewis-Beck & Nadeau, 2011) del voto económico ha recibido un fuerte apoyo empírico a escala nacional no solo en democracias desarrolladas con ingresos altos (Anderson, 1995; Norpoth, 1996; Lewis-Beck & Stegmaier, 2000; Dorussen & Taylor, 2003; Stegmaier & Lewis-Beck, 2007; Duch & Stevenson, 2008; y

⁴ Nannestad y Paldam (1994) y Lewis-Beck y Paldam (2000) le atribuyen a la economía un tercio de los cambios en el voto por el gobierno, y Duch y Stevenson (2006) estudian el voto económico en diecinueve países durante un periodo de dos décadas y encuentran que, en promedio, los partidos en el gobierno reciben un castigo de 5% en las urnas por cada unidad de deterioro de la economía.

⁵ Donde también se ubican otras *valence issues* (temas de interés) no económicas como la inseguridad y la corrupción.

otros) sino que también en democracias en vías de desarrollo con ingresos medios y bajos (Lewis-Beck & Stegmeier, 2008; Ratto & Lewis-Beck, 2013; y Nadeau *et al*, 2015) y coloca, indudablemente, a los cambios en el estado de la economía como una variable central en la predicción de la performance electoral de los *incumbents*. En este sentido, Álvarez, Nagler & Willette (2000) encuentran que, aun cuando otros factores son importantes, el voto económico es fuerte prediciendo resultados electorales. Argumentan que dada la fuerte correlación que existe entre economía y elecciones, los votantes pueden estar dando a los funcionarios electos un margen indebido en lo que respecta al desempeño de las funciones y el resultado de las políticas no económicas.

El ciudadano ejerce su voto en modo de rendición de cuentas y castiga o recompensa al gobernante por su performance: lo vota cuando la economía va bien y no lo vota cuando va mal. Sin embargo, existe una asimetría entre la recompensa electoral advertida ante buenos resultados y la pérdida de apoyo electoral durante los malos –lo que se conoce como *grievance asymmetry* (Nannestad & Paldam, 1994; Lewis-Beck & Paldam, 2000)– que podría explicar por qué un gobierno con una economía buena o moderadamente saludable puede ganar por muy poco o incluso perder una elección (Lewis-Beck & Paldam, 2000)⁶.

Es importante mencionar que este fenómeno no es lineal, sino que depende de muchos factores específicos como los lugares donde cada persona vive, trabaja y consume, las afinidades partidarias, la información disponible –en conjunto con la capacidad de las personas de usarla de manera racional– y otras características particulares de cada elección. Para matizar, es necesario preguntarse qué dice la literatura existente en cuanto a cuáles son los indicadores económicos que los votantes tienen en cuenta a la hora de evaluar la economía nacional y subnacional en distintos países, con qué precisión lo hacen, y de qué manera impactan en los resultados electorales.

‘La economía’ para los votantes

No es necesariamente la situación real de la economía lo que los votantes tienen en cuenta a la hora de votar, sino la situación que ellos mismos perciben (Lewis-Beck & Paldam, 2000; Singer & Carlin, 2013)⁷. Además, la literatura no tiene del todo claro cuál es el conocimiento real de los votantes acerca de la economía: algunos estudios demuestran que el votante sabe muy poco sobre macroeconomía en general

⁶ En esta línea, Boyne *et al* (2013) encuentran que, en el caso de los municipios ingleses, pasar de una performance moderada a una mala tiene un costo electoral para los intendentes, pero que no existe recompensa alguna por la buena performance. Además, la literatura sugiere que existe un costo base de estar en el gobierno (*cost of ruling*) estimado entre 1.7 y 2,5 puntos porcentuales (Nannestad & Paldam, 1994).

⁷ Cuanto más se acerca la percepción a la realidad, más fuerza tienen los estudios que miden el voto económico retrospectivo a través de datos de la economía real (Campello & Zucco, 2020; pp.18).

pero que su conocimiento se incrementa antes de cada elección (Lewis-Beck & Paldam, 2000), y otros indican que los votantes están bastante bien informados acerca de cómo funcionan algunas de las variables macroeconómicas (Duch & Stevenson, 2010).

Los votantes no analizan la economía en su conjunto sino que se centran en su percepción sobre variables específicas. Para Murillo, Oliveros y Vaishnav (2010) los votantes se limitan a evaluar los precios de los bienes de la economía porque es muy complejo evaluar el estado de la economía agregada. Como la inflación tiene un impacto directo en el bolsillo de los votantes, es entendible que partidos que gobiernan con índices altos de inflación sean castigados en las urnas. Siguiendo esta lógica es que la inflación se instala en la literatura del voto económico como una variable importante para votantes de todas las ideologías: Remmer (1991) comprueba que la relación entre saltos inflacionarios y apoyo presidencial es muy fuerte, Nannestad y Paldam (1994) encuentran que la popularidad de los gobiernos sube un 25% –y a veces más– cuando arreglan problemas de inflación, y Singer (2013) encuentra que la inflación –y el crecimiento– son las variables que impulsan más fuertemente el voto económico. En la esfera subnacional la inflación podría ser relevante únicamente de manera indirecta en la alineación del gobernador con el gobierno nacional; es altamente improbable que los votantes atribuyan problemas inflacionarios al gobernador, pero pueden castigarlo (recompensarlo) cuando su partido ocupa la presidencia y la inflación aumenta (disminuye).

Con la inflación desapareciendo en la mayoría de los países, otros indicadores se posicionan como variables explicativas en las teorías del voto económico clásico (Lewis-Beck & Paldam, 2000) –pero es esperable que siga siendo un factor determinante en los países donde aún persiste, como en Argentina. El desempleo conforma junto con la inflación el *Big-Two* (Nannestad & Paldam, 1994) de las variables que interesan a los votantes económicos (Conover, Feldman & Knight, 1986). Varios estudios utilizan la variación en la tasa de desempleo como un indicador de performance económica en las provincias: Warshaw (2017) encuentra que los votantes evalúan tanto el desempleo como los ingresos a la hora de apoyar a los gobernadores y que un crecimiento de 1% en los ingresos o el empleo significa un aumento de 1.4% en los votos para el partido del gobernador⁸; Barberia, Avelino y Zanlorenssi (2019) encuentran que los votantes recompensan el aumento del empleo formal por encima del promedio país en Brasil; y Hansen (1999) encuentra un impacto asimétrico (Stevenson, 2003) del desempleo en el apoyo electoral a los gobernadores –aunque se castiga la suba, un menor desempleo no se traduce en mayor apoyo. En cuanto a la capacidad de evaluación de los votantes, Lewis-Beck y Paldam (2000) encuentran que los votantes están al tanto de cómo funciona el desempleo pero tienen poca idea de cómo funciona la inflación, y Nannestad y Paldam

⁸ Además, encuentra que, a nivel municipal, ese 1% aumenta la cantidad de votos entre 0,1y 0,2%. Riera (2016) también encuentra evidencia del efecto de la tasa de desempleo en el apoyo electoral a los alcaldes españoles y sus partidos políticos.

(1994) encuentran que los votantes ricos se preocupan más por la inflación mientras que los votantes pobres se preocupan más por el desempleo.

La literatura también tiene en cuenta otras variables por fuera del *Big-Two* a la hora de estudiar y operacionalizar la performance económica. El crecimiento –o decrecimiento– de la economía ha demostrado ser una variable importante en varias partes del mundo (Wilkin, Haller & Norpoth, 1997; Singer, 2013; Dassonneville & Lewis-Beck, 2014) incluida Latinoamérica (Benton, 2005); el aumento de los ingresos por sobre el promedio nacional aumenta las probabilidades de reelección del gobernador (Adams & Kenny, 1989); una baja del 10% en los ingresos le cuesta a los oficialismos entre 4 y 5% de los votos (Kramer, 1971); la suba de impuestos y el deterioro de los ingresos de los ciudadanos impactan negativamente en el apoyo electoral hacia los gobernadores (Niemi, Stanley & Vogel, 1995); y el balance fiscal impacta los resultados electorales a nivel subnacional contingente en las etiquetas partidarias y las instituciones políticas (Lowry, Alt & Ferree, 1998). Por otro lado, Peltzman (1987) “no cree que los gobernadores tengan el poder o la capacidad de cambiar la prosperidad en sus estados, por lo que un votante informado no castiga al gobernador” (Adams & Kenny, 1989; pp.1) y agrega que, a nivel subnacional, los votantes sólo evalúan el crecimiento del presupuesto y castigan al gobernador únicamente por el aumento del mismo porque es la única variable que puede controlar.

Es claro que la situación económica en su conjunto abarca un espectro muy amplio de indicadores y variables. Es así que la evaluación se limita a ciertas variables específicas y se realiza con diferentes grados de precisión (Riba & Díaz, 2003), pero funciona de manera similar en todo el mundo (Wilkin, Haller & Norpoth, 1997; Duch & Stevenson, 2006; Lewis Beck & Stegmaier, 2019). El próximo apartado discute de qué manera los votantes económicos pueden emitir un voto económico a favor o en contra del gobierno.

¿Pasado o futuro? ¿Individual o colectivo?

Los trabajos clásicos de la literatura sobre voto económico se apoyan tanto en la evaluación prospectiva⁹ (Conover, Feldman & Knight, 1987; Fearon, 1999) como retrospectiva¹⁰ (Key, 1966; Fiorina, 1978) de la economía. Sin embargo, los resultados indican que la retrospectiva es más fuerte tanto en países desarrollados (Nannestad & Paldam, 1994, Lanoue, 1994, Lewis-Beck & Stegmaier, 2013) como en países en desarrollo (Tagina, 2012; Ratto & Lewis-Beck, 2013; Singer & Carlin, 2013; Nadeau *et al*, 2015;

⁹ Los ciudadanos votan conforme a sus expectativas económicas: apoyarán a quien suponen que con su victoria mejorará la situación económica, y no así a quienes creen que en caso de ganar la economía se deteriorará.

¹⁰ Los ciudadanos votan conforme a su evaluación de la performance económica pasada: apoyarán al partido oficialista cuando, a su juicio, la situación económica mejoró durante el mandato, y no lo harán en el caso de que crean que empeoró.

Oganesyan, 2015). Murillo, Oliveros y Vaishnav (2010) sostienen que el voto económico retrospectivo explica el giro a la izquierda de la política latinoamericana a comienzos del siglo XXI; argumentan que el giro fue producto del votante retrospectivo castigando el mal desempeño económico de los gobiernos de derecha. En esta misma línea, Remmer (1991) encuentra que, en Latinoamérica, los partidos oficialistas que se presentan a elecciones después de una mala gestión económica pierden votos en relación con su performance anterior, reforzando la teoría del voto económico como mecanismo de control.

Es importante destacar que particularidades de cada elección –como las candidaturas y la trayectoria política de los candidatos (Singer & Carlin, 2013)– pueden definir el tipo de evaluación. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos si el *incumbent* no se presenta para su reelección la retrospcción es débil y se refuerza el voto prospectivo, y viceversa si decide presentarse (Miller & Wattenberg, 1985; Nadeau & Lewis-Beck, 2001; Norpoth, 2003). Esto sugiere que es probable que exista un efecto de sucesión (Mattei & Weisberg, 1994) donde no se recompense o castigue con la misma intensidad al gobernador que va por su reelección que a otro candidato, ni siquiera cuando ese candidato es el *delfín*¹¹ del gobernador. De cualquier manera, solo la evaluación retrospectiva funciona, por naturaleza, como mecanismo de rendición de cuentas.

En simultáneo con el enfrentamiento teórico entre prospcción y retrospcción existe una segunda disputa en cuanto a las evaluaciones económicas y, otra vez, ambas teorías encuentran soporte empírico. Algunos trabajos clásicos de la literatura se enfocan en el estado de la economía egotrópica¹² (Bloom & Price, 1975; Kramer, 1983) y otros en el estado de la economía la sociotrópica¹³ (Kinder & Kiewiet, 1981). Lewis-Beck y Stegmaier (2019) demuestran que la literatura se inclina fuertemente por el comportamiento sociotrópico, lo cual no quiere decir que la teoría egotrópica sea irrelevante¹⁴ sino que es probable que si la economía ‘*va bien*’ (buen manejo de las cuentas, más crecimiento, menos inflación, menos desempleo, más ingresos y menos pobreza) la gente vive más tranquila y rescata cierta utilidad dentro de la mejora económica que no necesariamente debe ser rápida y directa hacia su bolsillo u hogar. Gomez y Wilson (2001) argumentan que este comportamiento depende de la sofisticación de los votantes: aquellos que puedan establecer un enlace entre las políticas y el desempeño económico del gobierno y la evolución de sus finanzas personales es más probable que se comporten de manera egotrópica.

¹¹ Término histórico que se refiere a los sucesores designados.

¹² Es decir que el votante se preocupa por su situación en particular –*pocketbook economics* o economía de bolsillo.

¹³ Es decir que el votante se preocupa por la situación económica de la sociedad en general.

¹⁴ Cabe aclarar que la fuerza de ambas teorías depende del lugar y tiempo de estudio: hay casos donde los votantes demuestran ser más egocéntricos sin estar muy claro por qué (Lewis-Beck & Paldam, 2000).

Otras dimensiones

Aunque la teoría clásica ha encontrado evidencia fuerte en todos lados, el universo del voto económico no solo incluye la evaluación de la situación pasada y las expectativas de cara al futuro. Con el correr de las décadas la literatura académica dio cuenta de la necesidad de explorar otras dimensiones, aunque estas se encuentren, en teoría, lejos de la punta del embudo de causalidad del *Modelo de Michigan*. Lewis-Beck y Nadeau (2011) clasifican al voto económico en tres dimensiones: la clásica (valencia), la posicional, y la patrimonial. Paparo y Lewis-Beck (2017) encuentran que, aunque el *valence economic voting* es fuerte en democracias avanzadas –como Canadá, Dinamarca, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, y Estados Unidos– también lo es el voto posicional, y sugieren que tanto los estudios como las encuestas deben comenzar a captar estas nuevas dimensiones. En esta línea, Nadeau *et al* (2015) dicen que el contundente soporte empírico que ha recibido la teoría clásica “ha eclipsado las posibilidades de poner a prueba” (pp. 235) las dimensiones posicionales y patrimoniales del mismo, especialmente en países en vías de desarrollo con ingresos bajos. El resultado de su trabajo es que en las elecciones presidenciales de Argentina las dos dimensiones rezagadas influyeron en los resultados electorales mediante el reforzamiento de las identidades partidarias de manera indirecta y la posesión de bienes de manera directa, abriendo la puerta a nuevos estudios que complementen la acotada literatura multidimensional en América Latina.

Una dimensión rezagada del voto económico es la posicional (Stokes, 1963), que se enfoca en la cercanía de los votantes con las políticas económicas que lleva a cabo el gobierno. Si como sugiere Carlsen (2000) los partidos tienen ideologías distintas que los llevan a asignar distintas prioridades económicas, la cercanía de los votantes con las políticas económicas que lleva a cabo el gobierno determina el apoyo; si el votante se identifica con las políticas su voto estará más cerca, y si no se identifica más lejos [*policy-oriented voters* (Kiewiet, 1983)]. Esto se suele aplicar a cuestiones como las políticas redistributivas y tributarias y el nivel de intervención estatal en la economía (Nadeau *et al*, 2015). Lo mismo pasa con la evaluación de los candidatos: los votantes apoyan a aquellos candidatos que sienten más cerca, ya que es más probable que ejecuten políticas económicas que podrían traerle beneficios [*incumbency-oriented voters* (Kiewiet, 1983)]. Un ejemplo para el caso argentino podría ser que aquellos votantes que buscan la redistribución progresiva del ingreso (o en otros términos la *justicia social*) voten por el peronismo, más allá de si este se encuentra o no en el gobierno y en tanto este partido lleve esta política como bandera. Esto también puede dar lugar a asimetrías partidarias (Lewis Beck & Paldam, 2000). Siguiendo el ejemplo del peronismo, en teoría, si la desigualdad aumentase durante un gobierno no peronista los votantes apoyarán a los peronistas en la próxima elección ya que ese es el partido que se preocupa porque haya una menor desigualdad (*clientele hypothesis*). De lo contrario, si la desigualdad aumenta durante un gobierno peronista, sus candidatos serán castigados particularmente fuerte en las urnas (*saliency hypothesis*) por decepcionar a quienes tenían la

expectativa de que la desigualdad mejorase durante su gestión. Estas asimetrías, que se originan por el hecho de que distintas ideologías asignan distintas prioridades, complican los estudios que buscan encontrar patrones entre países –más aún cuando la comparación incluye segundos y terceros niveles de gobierno.

La otra dimensión rezagada es la patrimonial, que se basa en la idea de que la ubicación de los ciudadanos en la estructura socioeconómica moldea su voto y tiene su origen en la noción de la distribución de los medios de producción: capitalistas versus trabajadores con intereses contrapuestos (Nadeau *et al*, 2015). “Tal como lo remarcan Lewis-Beck y Nadeau (2011; pp. 290) la variable económica patrimonial posee un impacto en el voto que atraviesa las tradicionales medidas de clase, ya que los votantes con una mayor acumulación de bienestar –acciones, casas, tierra– defenderán diferentes políticas y partidos –en particular, apoyarán a los partidos orientados al libre mercado. Para los Estados Unidos este tipo de tendencia ha sido comprobada en la asociación con el voto republicano (Lewis-Beck & Nadeau, 2009) ... [y] se demostró un patrón similar en Francia con el voto a la derecha (Foucault, Nadeau & Lewis-Beck, 2011)” (Nadeau *et al*, 2015; pp. 242). Todo esto indica que el voto económico es un fenómeno complejo que, a nivel subnacional y en países en desarrollo, se encuentra en una etapa de investigación bastante temprana. Además, las nuevas dimensiones indican que un votante perfectamente informado acerca del deterioro económico de su país, provincia u hogar puede decidir apoyar o rechazar al *incumbent* bajo otros fundamentos.

En Argentina

“Los trabajos existentes sugieren que las percepciones sobre el desempeño económico afectan las preferencias electorales de los argentinos” (Lodola, 2013; pp. 384) a escala nacional para todas las combinaciones teóricas, pero favorece la sociotrópica-retrospectiva. Gervasoni y Tagina (2019) encuentran que la economía nacional y personal y la dependencia del Estado en lo económico se relaciona con el voto a Scioli en 2015¹⁵; “Cantón y Jorrot (2002) encuentran evidencia a favor del voto sociotrópico –retrospectivo y prospectivo– en la elección de 1995 y del voto retrospectivo –sociotrópico y egotrópico– en la de 1999; Cataife (2011) reporta un efecto significativo del voto egotrópico retrospectivo en la elección de 2009¹⁶, ... [y] Lodola y Seligson (2013) encuentran que el voto sociotrópico es el determinante más importante del voto a favor de Cristina Fernández de Kirchner en la elección de 2011” (Lodola, 2013; pp. 385).

¹⁵ Además, el patrimonio se relaciona inversamente con el voto a Scioli, en línea con los otros trabajos sobre voto económico patrimonial (ver sección *Otras dimensiones* y Nadeau *et al*, 2015).

¹⁶ Lodola (2013) aclara que este efecto es perceptible entre los votantes de medianos y altos ingresos pero no entre los votantes de bajos ingresos, que no votan económicamente porque son los receptores de la política clientelar peronista.

Es esperable entonces que, en Argentina, donde la identificación partidaria es cada vez menor porque se combinan una “configuración poco ideológica de los partidos y el electorado con que los principales partidos políticos no tienen un perfil ideológico homogéneo” (Lodola, 2013; pp. 383 en referencia a Catterberg, 1989 y Catterberg & Braun, 1989) la selección de candidatos de acuerdo con la performance económica sea una de las únicas opciones disponibles de cara a la selección del voto. Además, los gobernadores argentinos sufren o disfrutan del efecto derrame de la performance económica nacional si comparten signo político con el oficialismo nacional (Remmer & Gélinau, 2003).

Antes de concluir con esta sección es importante mencionar que el contexto y los arreglos institucionales moderan el efecto del voto económico (Powell & Whitten, 1993; Anderson, 2007; Ashworth & Bueno de Mesquita, 2014), por lo cual la relación entre el desempeño de los gobiernos y la evaluación que los votantes hacen sobre el mismo puede empañarse por varias razones. La próxima sección revisa que dice la literatura acerca de las dificultades que los votantes enfrentan a la hora de emitir un voto económico y cuales son los escenarios bajo los cuales su eficacia como mecanismo de rendición de cuentas y selección de candidatos competentes es limitada.

Atribución de responsabilidades

En sistemas democráticos el mecanismo de rendición de cuentas más fuerte por fuera del sistema de contrapesos del Estado son las elecciones. “Lo que hace posible la representación política es el hecho de que los gobiernos tengan que rendir cuentas periódicamente ante los ciudadanos; si éstos no están satisfechos con su desempeño pueden deshacerse de sus gobernantes en cada elección” (Tagina, 2012; pp. 112). En la misma línea, Manin, Przeworski y Stokes (1999) postulan que los gobiernos rinden cuentas solo si los ciudadanos son capaces de distinguir gobiernos representativos de gobiernos no representativos¹⁷, y de castigarlos de manera acorde: reteniendo a aquellos con buen desempeño y expulsando a aquellos que no¹⁸. En ese caso, las elecciones funcionan como un mecanismo de *accountability* vertical porque se responsabiliza a los gobiernos por las consecuencias de sus decisiones y los resultados de sus políticas. Para Dorussen y Palmer (2003) el electorado expresa sus preferencias acerca del manejo correcto de la economía; sugieren que “los votantes menos ambiciosos evalúan al *incumbent* de acuerdo con los resultados de su política económica, incluidos inflación, desempleo, crecimiento, estado de la moneda, etc.” (pp. 2), y que si los políticos no están a la altura se demuestran incompetentes y no consiguen renovar su mandato.

¹⁷ Entendiendo como representación a la toma de decisiones e implementación de políticas en interés del público (Pitkin, 1972).

¹⁸ Hay que tener en cuenta que la rendición de cuentas a nivel provincial [y en todos los niveles de gobierno] “abarca mucho más que el estado de la economía” (King, 2001; pp. 594), aunque la literatura le asigne un rol central.

En la realidad y en la práctica este mecanismo encuentra dificultades para funcionar porque los votantes son “racionales pero propensos a la mala atribución” (Schiumerini & Novaes, 2021). La principal cuestión es que en países federales descentralizados, donde el gobierno central y los estados provinciales son corresponsables de la gestión pública, es difícil distinguir y atribuir responsabilidades entre los niveles (Anderson, 2000; Rodden & Wibbels, 2011); de hecho hay poca evidencia de que los votantes puedan evaluar por separado según los niveles de gobierno (Rodden & Wibbels, 2011). Esto podría significar que los funcionarios subnacionales son prisioneros de las dinámicas nacionales y tienen poco control sobre su destino político, o que logran utilizar las ventajas de la incumbencia para despegarse o no según les convenga, sin importar su desempeño comparativo.

Si una buena parte de las evaluaciones gira en torno a la dinámica nacional, los gobernadores tienen incentivos fuertes a alinearse con el oficialismo nacional cuando la economía va bien, y separarse y remediar el efecto derrame negativo con gasto público e inversión electoral cuando la economía va mal –a costas de la macroeconomía nacional si es necesario. Esto no sucedería si, por ejemplo, los funcionarios subnacionales se preocupasen por los problemas nacionales y actuaran localmente de manera tal de poner su parte para solucionarlos, pero están fuertemente incentivados a tomar otra postura. Una alternativa interesante en la literatura es que los votantes aprendan a asignar responsabilidades y competencias evaluando la preparación y la respuesta ante los shocks exógenos de los cuales los funcionarios no son responsables (Ashworth, Bueno de Mesquita & Friedenborg, 2018)¹⁹. Igualmente, los votantes deben ser capaces de identificar quienes son los funcionarios que tienen a disposición las herramientas necesarias para responder al shock: si se evalúa a los funcionarios que no pueden actuar en consecuencia, el problema de mala atribución muta y persiste.

También hay ocasiones donde los votantes castigan a los funcionarios por el impacto económico de los fenómenos de la naturaleza, incluidos tornados e inundaciones²⁰ (Achen & Bertels, 2004), o por el accionar de actores no-electos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial (Alcañiz & Hellwig, 2011)²¹. Por estas cosas, Manin, Przeworski y Stokes (1999) explican que “el control de los ciudadanos sobre los políticos es, a lo mejor, altamente imperfecto en la mayoría de las democracias” (pp. 50). Si los votantes tienen información incompleta, la tarea de seleccionar al mejor candidato y expulsar a los incompetentes es más complicado y las elecciones podrían ser insuficientes para asegurar la representación. Si los votantes son incapaces de atribuir responsabilidades, el voto en general y el voto económico en particular como mecanismo de representación falla (Dorussen & Palmer, 2003) y no motiva a los

¹⁹ El manejo de la situación sanitaria durante la pandemia COVID-19 es un buen ejemplo.

²⁰ Esto hace a los votantes blanco fácil para políticos demagogos; retrospectión ciega.

²¹ Según Achen y Bertels (2004) esto se debe a que los votantes ignoran completamente el funcionamiento de la ciencia y la política.

funcionarios a gestionar la economía, entre otras cosas, de manera eficiente. En consecuencia se deteriora la calidad institucional y de la provisión de bienes y servicios públicos (Gélineau & Remmer, 2006) en el distrito y se compromete el bienestar de sus habitantes.

En su libro *The Volatility Curse* (2020), Campello y Zucco demuestran que la dificultad para atribuir responsabilidades se incrementa en la mayoría de los países sudamericanos. Argumentan que, en países exportadores de *commodities* con poca capacidad de ahorro, la fortaleza de la cobertura social depende de los precios y las tasas de interés internacionales, por lo que ante un mal escenario internacional el sistema público de bienestar se desmorona²² y los votantes utilizan las elecciones para expulsar al partido de gobierno –y viceversa. Esto indica que los presidentes no solo pagan un precio alto por los platos rotos de la economía (Samuels, 2004; Gélineau, 2007; Carlin & Singh, 2015), sino que su resultado electoral está fuertemente ligado a factores exógenos a su control o influencia, lo cual es un mecanismo de representación bastante pobre. Además, como los funcionarios disponen de información mucho más completa que los votantes –y un mayor entendimiento de los ciclos de la política y la economía– son capaces de anticiparse a los resultados electorales y modificar su comportamiento. Cuando la elección es predecible –tanto si saben que ganan como si saben que pierden– los *incumbents* saben que su accionar ya no puede cambiar el resultado electoral, lo cual los vuelve propensos a evadir responsabilidades, malgastar recursos y fomentar la corrupción –entre otras malas prácticas. En cambio, cuando no tienen certezas sobre su continuidad en el poder, los funcionarios tienen más incentivos para representar mejor a la ciudadanía²³ –es decir que la competitividad aumenta la respuesta (Campello & Zucco, 2020). Este mismo escenario de mala atribución podría trasladarse a las provincias, donde los gobernadores son corresponsables de las decisiones y políticas públicas que inciden sobre las tasas de desempleo, pobreza y crecimiento, pero tienen poca influencia en la política monetaria, cambiaria, comercial y exterior del país.

También hay que tener en cuenta el sesgo partidario sobre la política económica y sus resultados. Por la influencia de la ideología en la selección de prioridades económicas y la inevitable identificación de los partidos con distintas ideologías, la lealtad y la identificación partidaria afectan la capacidad de los votantes para atribuir responsabilidades (Bartels, 2002; Anderson, Mendes & Tverdova, 2004; Tilley & Hobolt, 2011; Fernández-Albertos, Kuo & Balcells, 2013), especialmente cuando la performance económica es muy mala (Chzhen, Evans & Pickup, 2013) y cuando disminuye el nivel educativo y aumenta la exposición a programas televisivos²⁴ (Leigh, 2009). A pesar de todo, los votantes pueden emitir un voto económico efectivo –es decir asignar racionalmente el apoyo en las urnas– si logran una comparación lógica

²² En esta línea, Isuani (2014, 2015) habla de la necesidad de un capitalismo fuerte, capaz de soportar la demanda de bienestar.

²³ Aunque no necesariamente: también pueden gastar de más para ganar elecciones y asumir los costos luego.

²⁴ Podría ser un agravante en países donde “la polarización mediática es [electoralmente hablando] redituable” (Waisbord, 2020).

(*benchmarking*) con la evolución de la economía en países comparables (Kayser & Peress, 2012) o, a los efectos de este estudio, del desempeño económico de su provincia con respecto al promedio regional o nacional (Orth, 2001). Para poder calcular cual es la situación actual de la economía, los votantes necesitan información clara, precisa y confiable acerca de la performance pasada.

Mientras que en Europa la integración económica facilita este tipo de comparación, en Sudamérica la poca integración que permitieron las políticas de sustitución de importaciones durante el SXX la dificulta (Campello & Zucco, 2020). De cualquier manera, los autores demuestran que el fenómeno de *misattribution* “es un problema de capacidades cognitivas más que de falta de información” (pp. 28), aunque no dicen que la segunda no exista ni sea un factor importante. En cambio sostienen que la mala atribución se debe a que los votantes no saben cómo usar la información disponible, o deciden no hacerlo por afecto a los líderes y los partidos políticos. Para aclarar, los autores se refieren a la esfera política nacional; en los niveles subnacionales de gobierno en países en desarrollo hay grandes déficits informativos, incluidos medios controlados o influenciados fuertemente por intereses políticos (Boas & Hidalgo, 2011; Gervasoni, 2021) que hacen que emitir un voto económico efectivo sea más difícil.

A pesar de todas las limitaciones que impiden al voto económico funcionar como un mecanismo efectivo representación, es lógico que en Sudamérica siga una opción viable para que los votantes logren seleccionar candidatos competentes. Es decir que aunque a veces no cumpla con su objetivo, emitir un voto económico es válido y su rol en la democracia es central (Campello & Zucco, 2020)²⁵. Cuando “las etiquetas partidarias y las campañas vacías fallan en su afán de proveer atajos cognitivos a los votantes para evaluar la calidad de los representantes y candidatos” (Campello & Zucco, 2020, pp. 3) la retrospección sobre la economía “es la heurística más simple para evaluar competencia” (pp. 23). En países donde los partidos son inconsistentes, desilusionan constantemente al electorado al incumplir promesas de campaña y no tienen una identidad sólida y definida a lo largo del tiempo, los votantes mal informados, desinteresados, o confundidos podrían llegar triunfar en su búsqueda de funcionarios competentes a través del voto económico que, según Stokes (2001) es un comportamiento muy propio de la política latinoamericana²⁶.

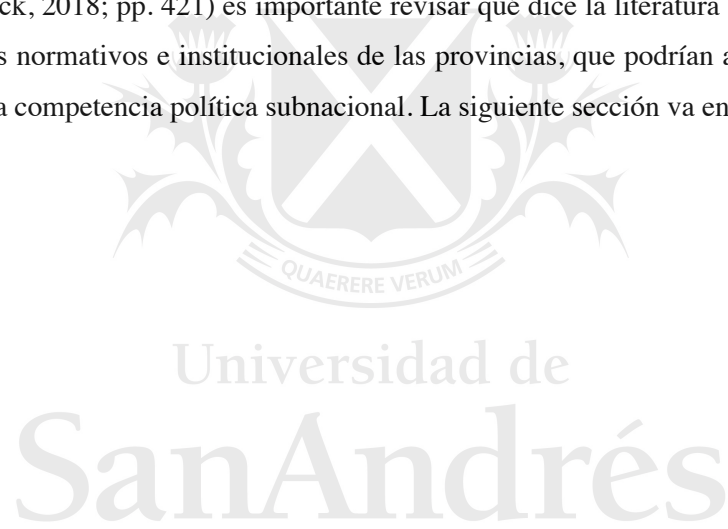
Por último, es fundamental para este estudio tener en cuenta los horizontes temporales de la retrospección. La evidencia científica demuestra que los votantes tienen horizontes temporales cortos (Tufte, 1978; Peltzman, 1987; Lewis-Beck & Paldam, 2000; Huber, Hill & Lenz, 2012; Healy & Lenz, 2014; Achen & Bertels, 2016): los trabajos sobre el voto económico retrospectivo rara vez incluyen la evolución de las

²⁵ Si “elegir bien pero solo a veces” es suficiente es otro tema, ver *Democracy for Realists* (Achen & Bertels, 2016).

²⁶ En sistemas estables, sin corrupción y con coherencia de los bloques políticos tanto en su discurso como en las votaciones legislativas, el mecanismo de selección funciona mejor que el mecanismo del castigo (Campello & Zucco, 2020) –es decir que es más factible la emisión de un voto económico prospectivo. Mientras tanto, la retrospección en la mejor opción.

variables macroeconómicas para el total del periodo del *incumbent* en el gobierno dentro de sus modelos estadísticos sino que, en cambio, trabajan con la evaluación de la situación de la economía a partir de las elecciones de medio término, un año o unos meses antes del día de la elección (Nannestad & Paldam, 1994, 2003; Gélinau & Remmer, 2006)²⁷. Esto es importante porque la miopía de los votantes tiene consecuencias directas sobre las decisiones políticas. Por ejemplo, si los gobernantes aumentan el gasto de manera irresponsable con el objetivo de maximizar su beneficio electoral en el corto plazo, no solo perjudican la situación económica de la provincia en mediano y largo plazo sino que también deterioran el balance fiscal de la federación en su conjunto: “*myopic policies for myopic voters* (Tufte, 1978, pp. 143)” (Achen & Bertels, 2016, pp. 143).

Como el voto económico “depende de los arreglos institucionales y los sistemas electorales ... [y] en Argentina es muy esperable que el sistema electoral se entrometa en la claridad del votante económico” (Valdini & Lewis-Beck, 2018; pp. 421) es importante revisar qué dice la literatura sobre el régimen fiscal y los distintos marcos normativos e institucionales de las provincias, que podrían afectar la atribución de responsabilidades y la competencia política subnacional. La siguiente sección va en esa dirección.



²⁷ A simple vista, un ejemplo reciente de los límites de la evaluación retrospectiva en Argentina es la derrota del expresidente Mauricio Macri –y de María Eugenia Vidal en Buenos Aires– en 2019 habiendo hecho una gestión económica aceptable hasta 2017, año en el cual su partido triunfó en las elecciones de medio término 5% por encima de la suma de los tres candidatos que compitieron con etiqueta peronista.

III) Selección de caso: Argentina

Federalismo y descentralización

Riker (1964) definió al siglo XX como “*el Siglo del Federalismo*” por la gran cantidad países que decidieron adoptar este sistema de organización territorial del poder basado en subunidades con autoridades y atribuciones propias constitucionalmente reconocidas. Esta tendencia se mantuvo en todo el mundo (Falleti, 2010) no solo hacia sistemas federales como Argentina, México y Brasil sino que también hacia sistemas unitarios descentralizados como España y Colombia. El federalismo argentino no fue producto de una negociación para hacer frente o beneficiarse de una posible invasión extranjera (como el norteamericano) sino que de un proceso largo y violento motivado por necesidades económicas mutuas de las provincias, la imposibilidad de una de ellas –Buenos Aires– de imponer su proyecto unitario, y que los vencedores de los conflictos locales en las provincias pobres apoyaron la creación de un gobierno central que no permita el dominio de una provincia sobre las demás (Gibson & Falleti, 2007). Esto podría ser una de las causas de la heterogeneidad poblacional y productiva y haber condicionado, de alguna manera, la relación de dependencia que existe entre el interior y la capital y los incentivos de los gobernadores a la hora de extraer recursos fiscales del gobierno central –y de administrarlos sin cuidado de la situación macroeconómica.

La adopción de un sistema federal facilita la descentralización de responsabilidades y recursos en diferente medida y bajo distintos diseños. En el caso de Argentina las provincias son poderosas (Hooge *et al*, 2016): ejecutan más del 40% del gasto público (Rodden & Wibbels, 2002; Carcioffi & Mayer, 2019) y “son responsables de la provisión pública de servicios esenciales para la sociedad” (Carcioffi & Mayer, 2019 pp. 3)²⁸. Ya en 1994 se encargaban del financiamiento, manejo y provisión del 90% de los servicios de educación y vivienda, el 74% de la salud, y el 50% de la seguridad y la justicia (Remmer & Gélinau, 2003). Además, se encargan de una parte no menor del transporte y las políticas de disminución de la pobreza y asistencia social²⁹ (Falleti, 2010; Gervasoni, 2011; González 2014) y delegan a los gobiernos municipales el cuidado del medio ambiente, la higiene urbana y la construcción de algunas obras públicas importantes como cloacas y viviendas –que en gran mayoría se llevan a cabo con transferencias desde el gobierno provincial.

²⁸ La segunda proporción de gasto subnacional más grande entre federaciones grandes después de India (Wibbels, 2005) y la primera en Latinoamérica (Inter-American Development Bank, 1997).

²⁹ Mitlin (2000) sugiere que aunque la discusión sobre la disminución de la pobreza se suele centrar en el rol de gobiernos nacionales u organismos y agencias internacionales, la tasa pobreza está ampliamente afectada por lo que los gobiernos subnacionales hacen o dejan de hacer; un campo olvidado en este tipo de estudios.

Dos tercios de los funcionarios públicos argentinos se encuentran operando a nivel provincial, incluidos jueces, policías, médicos y maestros, “cifra que crece hasta alrededor del 80% si se considera a los empleados municipales” (Gervasoni, 2011; pp. 76). La descentralización administrativa durante la dictadura militar (1976-1983), fiscal con la sanción de la Ley de Coparticipación en 1988 y política gracias a la reforma constitucional de 1994 no empoderó fuertemente a las provincias sino que estas ya eran poderosas antes del proceso (Falleti, 2010). Argentina tiene, en los ojos de la literatura, un federalismo robusto pero heterogéneo; es decir, que existe una fuerte asimetría entre la representación política y la población y productividad de sus unidades subnacionales (*malapportionment*)³⁰ que, en parte, podría justificarse por la diferencia de recursos naturales y factores productivos disponibles entre las provincias a la hora de negociar la estructura de la nueva confederación. Mientras que la Ciudad Autónoma (CABA) y la Provincia de Buenos Aires representan aproximadamente un tercio de la población y más de la mitad del PBI, las trece provincias menos pobladas apenas alcanzan el 15% en los mismos términos, pero son las que más recursos reciben del gobierno nacional por medio de transferencias y coparticipación³¹. Además, estas últimas pueden reunir una mayoría de votos en el Senado (39/72) para frenar o pasar un presupuesto o proyecto de ley de reforma económica (Capello, 2020), lo cual trae tensiones y consecuencias políticas que se revisan más adelante.

Una parte de la literatura académica supone que la descentralización soluciona problemas políticos –más democracia y mejor *accountability* al llevar el gobierno más cerca de las personas³² (Falleti, 2010)– y económicos –más desarrollo económico (Weingast, 1995) y un mejor uso de los recursos fiscales gracias al mejor conocimiento de las preferencias locales por parte de las autoridades (Tiebout, 1956, Oates, 1999; Shah, 2006). Otra parte de la literatura da cuenta de posibles efectos adversos de la descentralización: la creación de élites gobernantes que fuerzan relaciones de patronazgo y se benefician de prácticas clientelares a nivel local (ver Falleti, 2010; pp. 5 para una revisión completa) y el deterioro de la macroeconomía nacional producto del poco control del gasto público provincial (Rodden & Wibbels, 2002; Gélinau & Remmer, 2006).

“En algunas federaciones y como resultado de los conflictos distributivos con las autoridades centrales, los gobernadores llevaron las finanzas federales al borde del colapso fiscal e incluso desafiaron a las autoridades centrales con la secesión ... *los barones de la federación* en Brasil [Abrucio, 1998] y las

³⁰ “Argentina tiene el Senado más desproporcional del mundo, y un alto grado de desproporcionalidad en la Cámara de Diputados (Samuels & Snyder, 2001)” (Gervasoni, 2011b; pp. 586). Esto les da a los gobernadores de algunas provincias más poder del que le corresponde dada la magnitud de su provincia.

³¹ “La amplia y legislativamente sobrerrepresentada pero despoblada periferia” (Del Cogliano & Varetto, 2016; pp. 17).

³² Particularmente durante la transiciones desde el autoritarismo hacia la democracia, como sucedió en Argentina –y otros países Latinoamericanos– en la segunda mitad del siglo XX (Falleti, 2010).

presiones que generaron los gobernadores hacia la desintegración de la Unión Soviética [Alexander, 2004]” (González, 2014; pp. 340) son algunos ejemplos. En países como Argentina, Brasil y Rusia el federalismo se asocia con irresponsabilidad fiscal, bancos centrales cooptados por la política y altos niveles de volatilidad e inflación, pero no es el caso de otros países federales (Rodden & Wibbels, 2002). En este sentido, “Fornasari, Webb, y Zou (2000) encuentran una relación significativa entre el gasto y los déficits subnacionales y el déficit del gobierno central [y] ... Triesman (2000) demuestra que cuando los bancos centrales no son autónomos, el déficit subnacional deviene en niveles más altos de inflación” (Rodden & Wibbels, 2002, pp. 501). El alto porcentaje de gasto por parte de los gobiernos subnacionales desencadena los efectos negativos la descentralización sobre la macroeconomía (Rodden & Wibbels, 2002). Si la mayor preocupación de los gobernadores es el futuro sus carreras políticas, tienen “incentivos débiles para tomar decisiones fiscales que generen externalidades positivas para el resto de la federación” (pp. 500) si esto implica un sacrificio de los beneficios territoriales³³. En Argentina esta situación es posible porque el sistema federal se encuentra diseñado de manera tal que las provincias recaudan poco por su cuenta pero siempre reciben recursos desde el gobierno nacional para la ejecución de políticas públicas.

La mayoría de las provincias depende del gobierno nacional –y por ende de su situación económica– al mismo tiempo que la Constitución limita las capacidades del gobierno nacional para intervenir cuando el manejo de las economías provinciales deteriora la economía nacional (Benton, 2008). Es decir, que gozan de un alto nivel de autonomía y, en buena medida, los cambios en el bienestar de sus ciudadanos dependen de su propia gestión de los recursos disponibles y no solo del estado de la macroeconomía nacional³⁴. En esta línea, Andrews y Shah (2003) reconocen la importancia de la salud fiscal en las unidades subnacionales puesto que su deterioro genera una carga fiscal para los constituyentes: cuando se gasta mal, a futuro, es muy probable que la necesidad de pagar deudas reemplace a la inversión de recursos para mejorar la oferta de bienes y servicios públicos³⁵.

Las provincias argentinas adoptan sus propias constituciones, establecen su calendario electoral, eligen a sus representantes bajo un sistema electoral de su elección, pueden crear sus propias empresas e industrias, tomar préstamos, emitir bonos, y establecer sus propios bancos (Benton, 2008). También cobran una parte de los impuestos y ejecutan políticas públicas en áreas claves a través de una burocracia local que a la vez se encarga de ejecutar políticas nacionales en el distrito. Además, la autoridad de las provincias para diseñar

³³ Ver Prud’homme (1995) *The Dangers of Decentralization*.

³⁴ La “heterogeneidad en la respuesta subnacional” ante el COVID-19 (Behrend & Karamanef, 2021) también es un ejemplo interesante de la responsabilidad e incidencia de las provincias en la situación de sus ciudadanos.

³⁵ Es esperable que esto suceda en las provincias argentinas, que se ocupan de servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación.

e implementar política pública se complementa con “la *residual power clause*” (Ardanaz, Leiras & Tommasi, 2014; pp. 27) que establece que las provincias se reservan los poderes no delegados explícitamente al gobierno nacional.

Al mismo tiempo, en Argentina hay partidos políticos provinciales que ganan elecciones sin afiliaciones a nivel nacional, lo cual genera una “caracterización de la política nacional como un conjunto de sistema de partidos locales” (Benton, 2008; pp. 656)³⁶. Esto indica que “los gobiernos provinciales son menos autónomos que los nacionales, pero no son menos importantes” (Gervasoni, 2011 pp. 76). En países federales alrededor del mundo, los gobiernos subnacionales responden a las demandas de sus *constituencies*, que se manifiestan y los apoyan –o no– a través de las urnas (Falleti, 2010). El crecimiento de la importancia económica de las unidades subnacionales motivó a la ciencia política “a mirar hacia abajo” (Gervasoni, 2011 pp. 76), particularmente a centrarse en los determinantes de la selección de voto a nivel subnacional, el poder de los gobernadores y las ventajas del oficialismo. Las próximas secciones se dedican a revisar trabajos preexistentes en esas áreas.

Los gobernadores

Declaraciones como la de Rodríguez Saá durante la crisis de 2001: “*los que garantizamos la gobernabilidad somos nosotros*”, del exministro de economía Cavallo sobre la responsabilidad de los gobernadores en el aumento del déficit³⁷ y varios trabajos académicos dan pauta de que las provincias argentinas entran en conflicto con el gobierno nacional por la obtención de recursos fiscales y que sus gobernadores se encuentran entre los más poderosos del mundo (González, 2012, 2014). Producto de la descentralización de responsabilidades y recursos los gobernadores argentinos aumentaron su importancia política y fiscal en las últimas décadas (González, 2014) y, naturalmente, la literatura académica incrementó sus esfuerzos por estudiar los determinantes y las consecuencias de tal aumento.

Entre los factores que permiten a los gobernadores ganar elecciones mantener su posición de privilegio se identificaron factores económicos como la situación económica a nivel provincial y nacional, las transferencias desde el gobierno central, y el uso de recursos públicos en gasto social, empleo público, obras

³⁶ El Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Popular Fuegoño, el Frente Renovador de la Concordia y más recientemente Juntos Somos Río Negro son algunos ejemplos.

³⁷ “Un diario brasileño le preguntó al exministro de economía argentino Domingo Cavallo cuál había sido su mayor error al mando de la economía argentina durante el crítico año de 2001. Él respondió: ‘*Tendría que haber sido más contundente en la denuncia de que los gobernadores fueron los responsables de la debacle argentina*’ (diario Folha de S. Paulo)” (González, 2014; pp. 340).

públicas³⁸, e inversión electoral (relaciones de patronazgo y prácticas clientelares³⁹); factores políticos como la fragmentación partidaria, las conformación de coaliciones legislativas, el grado de polarización, el número efectivo de partidos, la alineación con gobierno central y las reglas electorales; y factores propios de los candidatos como el carisma y la confianza que inspiran en la ciudadanía (ver González, 2014; pp. 345-350 para una revisión completa).

Como líderes políticos en sus provincias, los gobernadores influyen sobre el armado de listas y las campañas políticas de diputados y senadores provinciales (Benton, 2008)⁴⁰. La manera en la cual estos legisladores llegan a ocupar sus bancas –muchas veces seleccionados a dedo por los gobernadores para ocupar puestos en las listas– podría limitar el control de las legislaturas locales sobre los oficialismos provinciales⁴¹. Entre las 19 variables sobre democracia subnacional que mide Gervasoni (2021; pp. 87) los tres resultados más bajos son aquellos relacionados a las restricciones institucionales (*judiciary control, legislative control y limitations by the national government*), que no llegan a medir 0.4 en un índice que varía entre 0 y 1. Gervasoni (2021) también demuestra que el control del poder legislativo y el control del poder judicial están correlacionados, es decir que es muy probable que en aquellos lugares donde uno no controla el otro tampoco lo haga y viceversa (ver pp. 93-94).

Además de liderar el proyecto político al interior de sus provincias, los gobernadores son actores acostumbrados al escenario político nacional como senadores, diputados, ministros y candidatos presidenciales⁴² y vicepresidenciales fuertes. Su capacidad de traccionar votos hacia las listas nacionales y garantizar apoyo legislativo (Moscovich & Brusco, 2018) los posiciona como aliados valiosos no solo de cara a procesos electorales, sino que también durante los cuatro años de gestión. Ninguna administración nacional quiere tener en contra a los gobernadores porque son sus peones en el Congreso quienes apoyan o

³⁸ Las obras públicas afectan los resultados electorales municipales cuando los gobiernos municipales reciben transferencias desde el gobierno provincial (Seira, 2020). Sin embargo, no resuelven el problema del compromiso: cuando el partido de gobierno entrega una obra pública no puede estar seguro de que los votantes no voten a otro candidato, pero la obra ya es irreversible (Magaloni, Díaz-Cayeros y Estévez, 2007).

³⁹ Ver Stokes, Dunning, Nazareno y Brusco (2013) *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*, y Oliveros (2021) *Working for the Machine: Patronage Jobs and Political Services in Argentina*.

⁴⁰ También lo hacen sobre las candidaturas municipales. En Argentina los municipios dependen de las provincias, no son entidades federales como, por ejemplo, en Brasil. Esto hace que gobernadores e intendentes sean compañeros asimétricos en las alianzas con el gobierno nacional (Moscovich & Brusco, 2018).

⁴¹ Con los posibles agravantes de que “los legisladores argentinos tienen un nivel de educación bajo (InterAmerican Development Bank, 2006; Saiegh, 2010) ... y suelen tener estadías cortas en el Congreso que no les permiten especializarse en ninguna comisión legislativa (Palanza, Scartascini, & Tommasi, 2012)” (Ardanaz, Leiras & Tommasi, 2014; pp. 40).

⁴² En 22 de los últimos 37 años el presidente en ejercicio fue gobernador anteriormente (30/37 si contamos a Cristina Fernández, esposa del exgobernador de Santa Cruz y expresidente Néstor Kirchner). Entre los gobernadores que no ganaron están Angeloz (1989), Massacessi (1995), Bordón (1995), Duhalde (1999), Adolfo R. Saá (2003), Sobisch (2007), Alberto R. Saá (2007 y 2011), Binner (2011), y Scioli (2015).

no las propuestas de reforma. Es por esto que los presidentes suelen negociar directamente con los gobernadores porque los legisladores nacionales son sus subordinados (Gervasoni & Nazareno, 2017). En este sentido, Rodden y Wibbels (2002) señalan que “una característica clave del federalismo político es la inclusión formal o informal de los gobiernos regionales como actores de veto en el gobierno central” (pp. 501). En la gran mayoría de las federaciones la cámara alta provee a los estados más chicos con ventajas de negociación ya que todas las provincias cuentan con igual número de representantes. Si las cámaras bajas son relativamente débiles, “los partidos regionales pueden obstruir la aprobación e implementación de políticas centrales coherentes” (pp. 501) para conseguir beneficios particulares para sus jurisdicciones, como es el caso de Argentina (Rodden & Wibbels, 2002). Todo esto causa que “uno de los mecanismos más importantes de la rendición de cuentas democrática, la rendición de cuentas horizontal (O’Donnell, 1998)” (Ardanaz, Leiras & Tommasi, 2014; pp. 40) se debilite y sea poco frecuente (ver Gervasoni, 2021; pp. 57-66 para una explicación detallada). Es en estos contextos, la rendición vertical (las elecciones) debe ser fuerte para evitar que los ciudadanos queden expuestos a las consecuencias de la *mala praxis* de los candidatos incompetentes o malintencionados, que es un obstáculo para la democracia y el desarrollo.

Sistema electoral

Argentina tiene un federalismo electoral complejo que “se ha profundizado considerablemente en las últimas dos décadas, dando lugar a una competencia electoral territorialmente diferenciada en un nivel muy superior al observado en la mayoría de las democracias modernas” (Del Cogliano & Varetto, 2016; pp. 16). Esto se debe a que las provincias argentinas están muy bien dotadas de recursos institucionales para controlar sus procesos electorales: los permisos de reelección⁴³, la utilización de una boleta única o partidaria en formato papel o digital, la regulación de listas colectoras y espejo, la adopción de la *ley de lemas* o doble voto simultáneo (DVS) y el desdoblamiento de las elecciones distritales respecto de las nacionales –a veces por ley como en Chaco y Tierra del Fuego y a veces a causa de intervenciones federales como en Corrientes y Santiago del Estero. La aparición de distintos marcos normativos de las provincias para elegir a sus representantes ocasiona que “quien quiera coordinarse nacionalmente deberá hacerlo primero en las arenas subnacionales” (Del Cogliano & Varetto, 2016; pp. 17), lo cual implica algún tipo de negociación o alianza de la política nacional con la esfera subnacional, destacando su importancia.

“Para que las elecciones funcionen efectivamente como un mecanismo de participación democrática y una instancia de rendición de cuentas, el electorado debe poder distinguir con claridad qué cargos están en

⁴³ En la actualidad dos provincias no permiten la reelección inmediata, tres permiten dos reelecciones inmediatas, tres permiten la reelección indefinida, y las dieciséis restantes permiten una sola reelección inmediata (CIPPEC, 2015).

disputa y quiénes se proponen para ocuparlos” (Mustapic, Scherlis & Page, 2011; pp. 1). En Argentina los votantes enfrentan una oferta electoral “cada vez más voluminosa, compleja, poco transparente y confusa” (pp. 1): las listas espejo⁴⁴, las listas colectoras⁴⁵, y la *ley de lemas*⁴⁶ “desnaturalizan la voluntad del elector y, con ella, las elecciones como instancia de participación y rendición de cuentas” (pp. 7). Al mismo tiempo, el desdoblamiento⁴⁷ “facilita la construcción de alianzas cruzadas o incongruentes ... en las cuales los partidos integrantes de una alianza de un nivel apoyan a candidatos distintos o integran alianzas de diferente composición en otras categorías de cargos (Clerici, 2013) ... [lo cual] permite disminuir los costos de incorporar actores a una coalición provincial que seguramente serán opositores en la nacional, o viceversa” (Del Cogliano & Varetto, 2016; pp. 19).

Como las provincias organizan sus propias instituciones y se rigen por las reglas que estas determinan y modifican, se “genera una gran variedad de sistemas políticos locales” (Cardarello, 2011; pp. 56) que afecta la competencia partidaria. La normativa electoral que rige estos sistemas es dinámica y ha sido modificada varias veces desde la vuelta a la democracia en 1983, generalmente a favor del oficialismo (ver Cardarello, 2011 para una revisión completa). Un caso extremo es el de Formosa en 2011, donde la legislatura (con amplia mayoría oficialista) derogó el DVS rápidamente cuando la oposición logró unirse bajo su propio lema. Varios estudios sostienen que los gobernadores argentinos utilizan estas herramientas para ganar elecciones y retener poder (Oliveros & Scherlis, 2004; Calvo & Escolar, 2005; Lucardi & Almaraz, 2017) y que a veces las complementan con mecanismos más duros o blandos para rebajar a los opositores (Gervasoni, 2021). Todo esto hace que “derrotar al partido de gobierno en el nivel provincial sea cada vez más difícil” (Schiumerini & Page, 2012; pp.1)⁴⁸ e indica que, en Argentina, los oficialismos provinciales podrían estar ganando elecciones y manteniéndose en el poder a pesar de gestionar no solo o no necesariamente la economía de su distrito de manera subóptima o problemática –lejos de que las elecciones funcionen como un mecanismo de rendición de cuentas.

⁴⁴ “Listas idénticas entre sí, con iguales candidatos pero presentadas por diferentes partidos o frentes electorales, que suman luego los votos recibidos por cada uno de ellos” (pp. 4).

⁴⁵ “Listas de diversos partidos que presentan candidatos propios para una cierta categoría pero adhieren a una misma lista de candidatos para otra categoría en la que no presentan candidatos propios (pp. 5).

⁴⁶ El permiso a que “un mismo partido (lema) presente varias candidaturas para el mismo cargo (sublemas) [y que] ... Los electores votan por sublemas [mientras que]... la distribución final del voto se realice considerando a los lemas” (Reynoso, 2004; pp. 69).

⁴⁷ Que conforma, junto con la división clara de poderes entre el gobierno central y los gobiernos regionales, los elementos básicos de un federalismo socialmente eficiente (Colomer, 1999).

⁴⁸ Las ventajas de ser oficialismo en Argentina se replican a nivel municipal (Del Cogliano & Varetto, 2016; Felsenstein, 2019; Feierherd & Lucardi, 2019, 2021).

Régimen fiscal y estructura productiva

En Argentina el gobierno nacional es el encargado de recolectar la mayor parte de los impuestos –como el impuesto a las ganancias, a los bienes personales, y al valor agregado– para luego redistribuir 42,34% al Tesoro Nacional, 56,66% a las provincias de acuerdo con la fórmula que establece la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, y 1% hacia el Ministerio del Interior para cubrir “crisis imprevistas en las provincias” (pp. 152) como incendios o inundaciones. A su vez, las provincias tienen “facultades amplias” (Tommasi, Saiegh & Sanguinetti, 2001; pp. 150) que les permiten tomar decisiones que aumenten su recaudación. Por ejemplo, modificar las fórmulas impositivas sobre los ingresos brutos y los impuestos al sello y las transferencias inmuebles, entre otras.

El sector público argentino es uno de los más descentralizados del continente (Tommasi, Saiegh & Sanguinetti, 2001) al mismo tiempo que Argentina es uno de los países con mayor *fiscal vertical imbalance* del mundo (Ter-Minassian, 1997; Rodden & Wibbels, 2002). Esto quiere decir que las provincias gastan mucho pero recaudan poco en comparación⁴⁹. Además, 17/24 provincias dependen en más del 80% de las transferencias del gobierno nacional (Capello, 2020), lo cual demuestra el alto nivel de dependencia –o bajo nivel de autonomía– de la provincia argentina promedio (Rodden, 2005)⁵⁰. Que la mayor parte de los ingresos sean recaudados por el gobierno nacional y “en los distritos económicamente más grandes” (Gervasoni, 2011; pp. 586) beneficia a la mayoría de los políticos a nivel local ya que disfrutan de las “*rentas del federalismo fiscal*” (Gervasoni, 2021): los beneficios políticos de gastar sin tener que enfrentar los costos políticos de recaudar impuestos (Gervasoni, 2011; Ardanaz, Leiras & Tommasi, 2014). No sería sorpresivo entonces que en la mayoría de las provincias donde el oficialismo tiene estas ventajas de diseño la rendición de cuentas electoral sea más débil, las elecciones menos competitivas (ver Page & Schiumerini, 2012) y la alternancia menos probable.

El federalismo fiscal argentino es ineficiente y complicado⁵¹. Según Tommasi, Saiegh y Sanguinetti (2001) es un verdadero “*laberinto fiscal*” que no sigue un criterio lógico y promueve incentivos perversos en la disputa por los recursos fiscales mediante su sistema de redistribución y transferencias que “beneficia fuertemente a las provincias menos pobladas y más sobrerrepresentadas (Gibson, Calvo & Falletti, 2004)

⁴⁹ En 2015, por ejemplo, recaudaron el 23,5% de los recursos y ejecutaron el 42,2%.

⁵⁰ También pasa en otros países: en las *First Nations* canadienses, que “combinan grandes desequilibrios verticales con poblaciones pequeñas y un tratamiento fiscal federal favorable (dependen de las transferencias del gobierno central para cubrir más del 90% de sus ingresos) ... una investigación reciente ha vinculado los problemas de gobernanza y *accountability* de estas comunidades a su extremadamente débil tributación y su alta dependencia del dinero federal (Graham & Bruhn, 2008)” (Gervasoni, 2011b; pp. 604).

⁵¹ No siempre fue así; hasta la década de los 1930s el federalismo fiscal no existía en Argentina. Solo a partir de 1935 la recaudación comenzó a redistribuirse entre las provincias, que originalmente eran 14 y a partir de los 1950s se fueron expandiendo hasta llegar a la actual conformación de 23 y una ciudad autónoma.

pero no a las más pobres (Remmer & Wibbels, 2000)” (Gervasoni, 2011; pp. 586). Este diseño genera tensiones entre actores a favor y en contra, especialmente cuando las administraciones en diferentes niveles de gobierno están atravesados por distintas ideologías y compiten bajo distintas etiquetas partidarias (Wibbels, 2005). A favor las provincias fiscalmente dependientes con poco poder de financiamiento propio que dependen de la coparticipación y las transferencias federales –y se verían perjudicadas si las reglas se movieran en dirección de la autosuficiencia; y en contra las provincias independientes que recaudan y producen mucho pero se verían perjudicadas por aumentos en la progresividad del sistema redistributivo. Si las características de la mayoría de las provincias se asemejan a la primera –como en Argentina– es poco probable que las propuestas de modificación del sistema de redistribución y diseño fiscal se aprueben en el Congreso: ni los gobernadores ni sus legisladores en la capital tendrán interés alguno en que avancen.

Del lado de los representados, Jones, Meloni y Tommasi (2012) encuentran que “los votantes recompensan a los gobernadores por su habilidad de obtener recursos fiscales adicionales del juego fiscal federal ... un mecanismo que debilita la habilidad de los ciudadanos de recompensar una buena performance gubernamental” (Ardanaz, Leiras & Tommasi, 2014; pp. 39) y perjudica la situación fiscal de la federación en su conjunto. Rodden y Wibbels (2002) argumentan que en los países en aquellos países donde las políticas del federalismo se financian con transferencias gubernamentales, “la descentralización de responsabilidades fomenta la indisciplina fiscal y crea presión inflacionaria, como es el caso de Argentina” (pp. 496). Todo esto indica que los gobernadores tienen grandes incentivos electorales para llevar a cabo políticas miopes (Achen & Bertels, 2012, 2016) con consecuencias macroeconómicas fuertes.

Gervasoni (2011) da cuenta de que aunque “solo recientemente las teorías fiscales han sido aplicadas a nivel subnacional” estas diferencias son “claves para explicar los resultados políticos” (pp. 581). En provincias donde la productividad y la capacidad de financiamiento son bajas, el Estado es la mayor fuente de riqueza; y si esos recursos se utilizan discrecionalmente para pagar salarios en el sector público y financiar redes clientelares, los incentivos para oponerse al oficialismo son pocos (Gervasoni, 2011, 2021). Esto se sustenta en la idea que “la capacidad de ganarse la vida independientemente del Estado es crucial para la práctica democrática” (McMann 2006; pp. 4) y para el funcionamiento del voto económico como mecanismo de selección. “Los ciudadanos económicamente autónomos son más proclives a participar en política y a desafiar a las autoridades, creando así condiciones favorables para la democracia; por el contrario, donde el Estado domina las oportunidades económicas, los individuos [y los demás agentes

económicos] racionalmente obedecerán pasivamente” (Gervasoni, 2011; pp. 581) porque dependen del presupuesto provincial al mismo que tiempo que este no depende de ellos (Gervasoni, 2021)⁵².

Como el presupuesto está relacionado con la capacidad de financiamiento y esta está estrictamente ligada a la productividad (González, 2012), es necesario revisar que dice la literatura sobre las distintas estructuras económicas subnacionales. En Estados Unidos, Wolfers (2002) encuentra que no solo en estados petroleros se reelige a los gobernadores dependiendo de los precios internacionales sino que en los demás estados procíclicos los votantes constantemente recompensan a los gobernadores durante las épocas de crecimiento para soltarles la mano cuando la situación desmejora, es decir, que sistemáticamente los votantes juzgan a los gobernadores por circunstancias más allá de su alcance. En Brasil, los votantes responsabilizan menos al gobernador por el deterioro económico en estados agricultores y fiscalmente dependientes del gobierno nacional y más en estados autónomos donde predominan la industria y los servicios (Ebeid & Rodden, 2006; Barberia, Avelino & Zanlorenssi, 2019). Y en Argentina –además de los trabajos de Remmer y Gélinau mencionados anteriormente– Díaz-Rioseco (2016) demuestra que cuando la economía provincial depende de actividades extractivas se genera una dinámica parecida a la dependencia financiera (para un análisis entre países ver Ross, 2001).

Para terminar, “Dahl (1993) señala ... que la presencia de una mayor cantidad de actividades o sectores económicos significa que existen diversos actores con recursos y que esos actores pueden tener intereses distintos” (Behrend & Bianchi, 2017; pp. 224), por lo cual es más difícil para el gobierno provincial intervenir en las actividades económicas en beneficio propio y empañar al voto retrospectivo como mecanismo de rendición de cuentas democrática –apoyando la teoría de McMann y Gervasoni, entre otros. Todo esto indica que las características productivas y el nivel de diversificación de la economía provincial podrían moderar la utilización del voto económico.

⁵² No conviene oponerse al oficialismo: los medios de comunicación no publican ni investigan en contra, la gente no se manifiesta públicamente, y los poderes judicial y legislativo no controlan como deberían (Gervasoni, 2021).

IV) Marco metodológico

Hipótesis

Una parte de la literatura postula que los *incumbents* recibirán un fuerte apoyo en las urnas cuando la economía nacional mejora independientemente de que la performance en su provincia sea mala, y serán castigados cuando la economía nacional se deteriora sin importar que hayan hecho un buen trabajo en su provincia –fenómeno que se conoce como *referendum voting*. Otra parte sugiere que los votantes juzgan a los funcionarios provinciales de manera retrospectiva en base al desempeño de la economía local. Por ende, en este trabajo (H1) el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor cuando la economía provincial mejora; y (H2) el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor cuando la economía nacional mejora.

La efectividad el voto económico subnacional depende de la estructura económica y el tipo de producción dentro de la provincia porque genera preferencias diferentes acerca de las políticas laborales (Barberia, Avelino & Zanlorenssi, 2019). En las provincias con grandes ciudades donde predominan la industria y los servicios, los votantes demandan políticas laborales que reduzcan el desempleo –especialmente si el trabajo escasea y la informalidad es grande, como en Argentina. Es así que la tasa de desempleo es informativa sobre la situación económica (Ebeid & Rodden, 2006) y representativa de la competencia del candidato oficialista. En cambio, en las provincias agrícolas y extractivas sin centros industriales grandes, las principales actividades son altamente dependientes del clima, los precios internacionales y otras cuestiones por fuera del alcance de los oficialismos locales –como los impuestos sobre las exportaciones y los cambios en las regulaciones sectoriales que dependen del gobierno nacional. En ese caso, los indicadores de la economía local –incluida la tasa de desempleo– no son tan útiles para evaluar la competencia del gobernador y su gestión ya que la evolución de estos factores se encuentra fuera del alcance de sus decisiones (Ebeid & Rodden, 2006). Uno de los supuestos de este trabajo es que en Argentina (H3) el efecto de la performance económica local sobre el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor en provincias donde predominan la industria y los servicios, y menor en provincias donde predominan actividades agrícolas y extractivas.

Por último, la capacidad de los gobernadores para mantenerse en el poder se debe al aumento del gasto social y el empleo público (González, 2014) –que es más seguro y estable que el privado. Al mismo tiempo, la dependencia del Estado genera pocos incentivos para oponerse al oficialismo (McMann, 2006; Gervasoni, 2011, 2021): en las provincias más pobres, donde un porcentaje más grande de la población depende del Estado, los gobernadores obtienen un mayor beneficio del clientelismo y las políticas de *pork-*

barrel (Calvo & Murillo, 2004). Supongo que en Argentina (H4) el efecto de la performance económica local sobre el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor en provincias donde el peso del Estado en la economía es menor, y viceversa.

Datos

Desde la vuelta a la democracia en 1983, en Argentina hubo 236 elecciones provinciales. La base de datos para este trabajo cuenta con 208 observaciones (cada una correspondiente a una de estas elecciones) compuestas por más de 85 variables tanto políticas y electorales como económicas y productivas. Las 28 elecciones restantes no fueron incluidas porque no existió el fenómeno de la incumbencia: ningún candidato representó al oficialismo y, de esta forma, no podría haber habido ningún tipo de rendición de cuentas electoral en base a su desempeño. Dentro del grupo de 28 observaciones descartadas se encuentran las 24 primeras elecciones para cada provincia (22 en 1983, Tierra del Fuego en 1991, y CABA en 1996) y 4 elecciones que se celebraron luego de una intervención federal (Corrientes 1993 y 2001 y Santiago del Estero 1995 y 2005). La base de datos representa las últimas nueve elecciones a gobernador –casi 40 años– para todas las provincias, con algunas excepciones⁵³.

Variable dependiente

La variable dependiente es el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su *delfín* –el oficialismo– en base a datos del Atlas Electoral (Tow, 2021) y la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior.

Variable independiente principal

El predictor principal es la performance económica. A nivel nacional operacionalizada como la evolución, por separado, del producto bruto interno (PBI) y el índice de inflación según datos del Banco Mundial; y a nivel provincial medida como la evolución, también por separado, del producto bruto geográfico (PBG)⁵⁴ según datos de la Fundación Norte y Sur⁵⁵ y la tasa de desempleo y el nivel de ingresos medios⁵⁶ a partir de

⁵³ Últimas 7 elecciones para Tierra del Fuego, 6 para CABA, 7 para Corrientes, 7 para Santiago del Estero, y 10 para Catamarca (hubo un llamado a elecciones adicional en 1988). En general los años electorales son 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019, pero también hay algunas excepciones: Catamarca (1988), CABA (2000), Córdoba (1998), Corrientes (1997, 2005, 2009, 2013 y 2017), y Santiago del Estero (2002, 2008, 2013 y 2017). En ciertos casos –como Santiago del Estero– el desacople anual con las elecciones nacionales es producto de las intervenciones federales por violación de los derechos humanos y otras irregularidades incompatibles con el buen funcionamiento democrático.

⁵⁴ Medido a precios constantes de 2004.

⁵⁵ Complementados por datos de direcciones provinciales de estadística e indicadores sintéticos de actividad económica.

⁵⁶ Medidos a escala individual y ajustados por el índice de inflación.

los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)⁵⁷. Se construyeron variables con un año de retraso para captar la evolución de los indicadores nacionales y provinciales porque la literatura ha demostrado ampliamente que los votantes tienen horizontes temporales cortos a la hora de evaluar a los funcionarios por su desempeño; utilizar el promedio de la totalidad del periodo de gobierno sería inconsistente con la literatura sobre voto económico. Además, como el crecimiento económico de las provincias depende en gran medida del crecimiento nacional, que uno de los argumentos de este trabajo es que los votantes evalúan el desempeño económico de los gobernadores para determinar su competencia y decidir su voto, y que para esto es necesario lograr una comparación efectiva con alguna unidad comparable (lo que se conoce como *benchmarking*), en este trabajo los datos sobre la evolución de la economía provincial están ajustados con respecto al valor de la variable en el promedio del país. Esto permite captar cómo las provincias se separan de la tendencia nacional y por ende estimar hasta qué punto la emisión de un voto económico funciona como un mecanismo de selección de candidatos competentes en Argentina. Se usa más de un indicador por variable porque la literatura sobre voto económico encuentra resultados distintos dependiendo del método de operacionalización de la variable (ver *La 'economía' para los votantes* más arriba).

Variables moderadoras

Otras dos variables independientes son, al mismo tiempo, variables moderadoras o interactivas que podrían aumentar o disminuir el efecto de la performance económica sobre el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato en las elecciones provinciales. La primera es el tipo de producción según la clasificación de Behrend y Bianchi (2017): industriales, agrícolas, y extractivas. En el caso de que una provincia tenga una economía diversificada e incluya más de uno de estos sectores, se toma el sector predominante según los informes productivos del Ministerio de Economía y, en los casos donde existen, los ingresos por regalías hidrocarburíferas (Capello, 2020). Las provincias agrícolas que también son industriales –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza– se codifican como industriales; sería inconsistente incluir en la misma categoría a las provincias pobres del norte agrícola con las provincias ricas del centro agroindustrial.

La segunda variable interactiva es el peso del Estado en la economía. Como en Argentina los políticos en distritos fiscalmente dependientes del gobierno central disfrutaban de los beneficios electorales de la

⁵⁷ En los casos donde el aglomerado urbano no pudo ser censado –e.g. por inundaciones o paros por parte del personal– y la EPH no cuenta con un valor al mismo mes o trimestre del año anterior al electoral, tomo el próximo valor de referencia más cercano. No se utilizaron los datos de pobreza porque los datos del INDEC en la materia para el periodo 2007-2015 son inconsistentes, y las reconstrucciones de la serie de pobreza –e.g. la del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA)– no incluyeron la medición por aglomerado censal.

redistribución, el funcionamiento de las elecciones en general y del voto económico en particular como mecanismo de selección de candidatos competentes a nivel subnacional podría fallar, y los supuestos beneficios del federalismo y la descentralización quedar inertes o, en el peor de los casos, resultar contraproducentes –como por ejemplo si esto deviene en la compra de voluntades políticas a nivel local. Como una mayor productividad está relacionada con un sector privado pujante y que el protagonismo del Estado en la economía aumenta conforme se debilita el del sector privado (Gervasoni, 2021), se utiliza el nivel de autonomía de las provincias –medida de manera continua como la participación los recursos tributarios de origen provincial (RTOP) en el total de los ingresos provinciales⁵⁸– para cuantificar el peso del Estado en la economía provincial. Vale aclarar que, a diferencia de los recursos de origen nacional (RON) –que podrían ser una alternativa para medir el peso del Estado a través de la dependencia del gobierno central– los RTOP no incluyen a las regalías hidrocarburíferas que algunas provincias reciben por la extracción dentro de sus límites (Capello, 2020). Esto se justifica porque la disponibilidad y explotación de estos recursos produce un efecto similar a la dependencia del gobierno central (Díaz-Rioseco, 2016): rentas extraordinarias (Gervasoni, 2021) –contrario a lo que sucede cuando una buena parte del presupuesto provincial depende de la recaudación de impuestos (Barbería, Avelino & Zanlorenssi, 2019). De esta manera el peso de Estado en la economía es mayor conforme aumenta el valor de *100 – AUTONOMÍA* (en términos de RTOP). La figura 1 más abajo es un mapa de las provincias argentinas según el tipo de estructura económica y valor promedio 1983-2019 del peso del Estado provincial en la economía.

Variables de control

Trabajos anteriores sugieren que cuando el gobernador no se presenta para su reelección la retrospección es más débil que si lo hace (Miller & Wattenberg, 1985; Nadeau & Lewis-Beck, 2001; Norpoth, 2003; Singer & Carlin, 2013), lo cual indica que podría existir un efecto de sucesión (Mattei & Weisberg, 1994) donde no se recompensa o castiga con la misma intensidad al gobernador que va por su reelección que a un candidato nuevo. Es por esto que la primera variable de control es la candidatura, medida a través de una variable *dummy* que toma valor (1) cuando el candidato oficialista es el gobernador y (0) cuando es su *delfín*⁵⁹.

⁵⁸ Según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

⁵⁹ El *delfín* del gobernador es, generalmente, un miembro de su gabinete, su vicegobernador o algún familiar cercano, aunque también existen otro tipo de casos –ver *Anexo* para detalles sobre las candidaturas por provincia. Ardanaz, Leiras y Tommasi (2014; pp. 31) presentan dos frases que ilustran esta dinámica: la de los exgobernadores Carlos Juárez “*Santiago del Estero es Carlos Arturo Juárez*” y Néstor Kirchner “*Sergio, yo no te doy la provincia, te la presto*” en referencia a su candidato a gobernador Sergio Acevedo en 2003, año que Kirchner no se presentó a su reelección en Santa Cruz y en cambio ganó la carrera presidencial.

Segundo, se controla por desdoblamiento (1) o simultaneidad (0) de las elecciones provinciales con las nacionales combinando datos del Observatorio Electoral Argentino del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (OEAR-CIPPEC) y el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior (OPE). Según Colomer (1999) las elecciones provinciales desdobladas de las nacionales son un elemento fundamental para el funcionamiento eficiente de un sistema federal porque facilitan el voto dividido entre niveles. Como se explica en la sección sobre *Sistema electoral*, en Argentina el desdoblamiento es una herramienta política importante.

Y tercero, se controla por las etiquetas partidarias de los candidatos a través de una variable *dummy* que toma un valor de (1) si el oficialismo provincial pertenece al mismo partido o comparte signo político con el gobierno nacional y un valor de (0) cuando esto no sucede.

Como la literatura demuestra que el efecto derrame del desempeño económico del gobierno nacional afecta el desempeño electoral de los candidatos subnacionales alineados con el gobierno nacional (Remmer & Gélinau, 2003; Gélinau & Remmer, 2006), estos tres controles podrían reproducir el comportamiento estratégico de los actores y generar un problema de endogeneidad. Como los gobernadores disponen de más información y conocimientos políticos y económicos que los votantes, son capaces de anticiparse a los resultados electorales adversos o favorables y modificar su comportamiento (ver sección *Atribución de responsabilidades* más arriba). En 2015 “de los 11 distritos que celebraron elecciones simultáneas, 10 pertenecían al oficialismo nacional ... [lo cual] reafirma el uso estratégico del desdoblamiento por parte de los gobernadores opositores para resguardarse de la incertidumbre y los costos de la coordinación alrededor de la disputa presidencial” (Del Cogliano & Varetto, 2016; pp. 21). En 2019, con la economía nacional en crisis, solo cuatro provincias tuvieron elecciones simultáneas: dos oficialistas como Buenos Aires (donde el oficialismo evaluó y discutió la posibilidad de desdoblar las elecciones, no lo hizo y perdió) y CABA (bastión electoral del partido en el gobierno que buscaba la reelección a nivel nacional), y dos opositoras como Catamarca y La Rioja.

También podría existir un problema ante los retiros estratégicos en las decisiones sobre las candidaturas. Para abordar este problema se analizaron las 208 elecciones (candidaturas) que conforman la muestra⁶⁰. Solo 14 veces un gobernador con permiso de reelección decidió no presentarse, de las cuales solo una podría ser un retiro estratégico ante una posible derrota (Castillo en Catamarca, 2003). Los otros 13 casos se dividen entre los gobernadores *delfines* que devolvieron el puesto o la candidatura a su jefe político cuatro años después (5)⁶¹; aquellos vicegobernadores o presidentes de cámaras legislativas provinciales que

⁶⁰ Adrián Lucardi compartió los datos sobre límites de mandato y reformas constitucionales en las provincias argentinas.

⁶¹ Tauguinas (Chaco, 1995), Nikisch (Chaco, 2007), Peppo (Chaco, 2015), Poggi (San Luis, 2015), y Ledesma Abdala (Santiago del Estero, 2017).

asumieron la gobernación luego de muerte en el cargo, renuncia, o destitución de sus superiores (4)⁶²; los que decidieron no presentarse por cansancio o cuestiones personales como la edad y las enfermedades (2)⁶³; y los dirigentes pertenecientes a partidos o coaliciones que se rigen o rigieron bajo un acuerdo interno de alternancia (2)⁶⁴. También existieron casos en donde el gobernador renunció y se postuló (o fue designado) para ocupar cargos nacionales cuando tenía chances altas de poder reelegirse en su provincia⁶⁵.

Esto demuestra que la gran mayoría aprovecha las ventajas de estar en el poder en las provincias para reelegirse, situación que no se replica en otras democracias federales como Brasil –donde ser oficialista significa una desventaja de cara a las siguientes elecciones (Novaes & Schiumerini, 2021). En 8 provincias argentinas (Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, Buenos Aires, Neuquén y Tierra del Fuego) nunca un gobernador con permiso de reelección decidió no presentarse, y en todas las provincias argentinas la tasa de reelección es alta (ver Page & Schiumerini, 2012 y *Anexo* sobre candidaturas)⁶⁶.

Algo similar sucede con la alineación política de los gobernadores con el gobierno nacional: se acercan cuando la economía nacional va bien y se distancian (o buscan pasar desapercibidos en cuanto a su alianza) cuando va mal. Existen casos de candidatos peronistas a nivel provincial no alineados al peronismo nacional (como Tierra del Fuego 2003, La Pampa 2007, y Córdoba 2015), y de candidatos de origen radical (u otros partidos provinciales) alineados con el peronismo nacional (como Catamarca 2007, Santiago del Estero 2008 y 2013, y Misiones 2015). Es por este problema de autoselección que uso la coincidencia de la etiqueta partidaria –como variable *dummy*– y no el apoyo político; controlar por el mismo partido podría ser un poco menos problemático porque al interior de los partidos se plantean diferencias y se apoyan distintos liderazgos. Coeficientes altos y significativos en estos tres controles reforzarían la efectividad de estas herramientas estratégicas, a disposición de los *incumbents* subnacionales en Argentina.

⁶² Garbe (Catamarca, 1988), Alderete (Jujuy, 1991), Olivera (CABA, 2000), y Lemme (San Luis, 2003). Otros tantos vicegobernadores que asumieron aprovecharon la situación y reeligieron con éxito.

⁶³ Como podría ser Corpacci en Catamarca (2019) –decidió no presentarse para su tercer mandato luego de cuatro años como vicegobernadora y ocho como gobernadora– o Verna en La Pampa (2019) –expresó públicamente su voluntad de correr pero no pudo porque se le diagnosticó una enfermedad grave.

⁶⁴ Como el peronismo cordobés con Schiaretto en 2011 y De la Sota en 2015.

⁶⁵ Como por ejemplo Ruckauf (Buenos Aires, 2003), Alberto R. Saá (San Luis, 2003) y Néstor Kirchner (Santa Cruz, 2003).

⁶⁶ En Neuquén, San Luis, la Rioja y Formosa el mismo partido retiene la gobernación desde la vuelta a la democracia en 1983.

Figura 1



Fuente: elaboración propia en base a la clasificación de Behrend y Bianchi (2017) y datos de DNAP.

Estrategia y modelos

Para testear las hipótesis se utilizan modelos lineales OLS (mínimos cuadrados ordinarios) con efectos fijos (*fixed effects*) y datos de panel indexados por provincia por año donde, de acuerdo con la literatura sobre los horizontes temporales cortos de los votantes, el resultado de cada año también es representativo del periodo de gobierno de cuatro años. La selección de efectos fijos responde a las características de los datos y la variación de los indicadores a lo largo del tiempo. De esta manera se puede controlar por las diferencias estructurales entre provincias, que funcionan como sus propios controles (Plumper & Troegel, 2007; Williams, 2018). Caso contrario, un modelo con efectos aleatorios (*random effects*) debería asumir que bien no hay variables omitidas o que estas “no están correlacionadas con las variables explicativas a lo largo del tiempo (Wooldridge, 2002; Hsiao, 2003)” (Díaz-Rioseco, 2016), un supuesto fuerte para este trabajo. Para complementar esta justificación teórica de los modelos de especificación se llevaron a cabo *tests* de Hausman (1978) donde para 6/8 modelos los resultados son menores a 0.05 –es posible rechazar la hipótesis nula (*random effects*) y asumir que los efectos fijos son los preferidos (Greene, 2008; Torres-Reyna, 2010). De cualquier manera, se corrieron los mismos modelos con efectos aleatorios sin cambios significativos en los resultados.

La ecuación estadística que relaciona la situación económica con el apoyo electoral a los *incumbents* y sus partidos a nivel subnacional es

$$V_{pt} = \beta e_{pt} + \beta E_{nt} + X + \delta + \epsilon$$

donde V_{pt} es el porcentaje de votos obtenidos por el oficialismo provincial, e_{pt} es la evolución de la situación económica provincial durante los últimos doce meses anteriores a la elección en comparación con el promedio nacional, E_{nt} es la evolución de la economía nacional durante el mismo periodo, X es el conjunto de variables de control (etiqueta, candidatura y desdoblamiento), δ es el conjunto de efectos fijos por año y provincia, y ϵ es el término de error estadístico.

Tanto H1 como H2 se ajustan naturalmente a esta ecuación y tipo de modelo⁶⁷, y para probar H3 se segmenta las base de datos según el *tipo de producción* y se corren modelos separados para comparar los coeficientes de los modelos con y sin provincias industriales. En cambio, H4 presenta algunos problemas: la variable continua *peso del estado en la economía* está negativamente sesgada –la mayoría de las provincias depende en gran parte del gobierno nacional para su financiamiento– y no puede ser corregida bajo la aplicación de

⁶⁷ Vale aclarar que existen ecuaciones y modelos parecidos en la literatura sobre voto económico y atribución de responsabilidades (e.g. en Haller, Wilkin & Norpoth, 1997; Gélineau & Remmer, 2003; Remmer & Gélineau, 2006; Díaz-Rioseco, 2016).

ninguna base logarítmica (ver *Estadística descriptiva*). Por este motivo se realizó una recategorización de la variable en cuartiles y se corrieron modelos separados para comparar coeficientes entre ellos ($N \times$ cuartil $\cong 51-53$). Para estos modelos, los *tests* de Hausman (1978) indican que 8/12 modelos prefieren efectos aleatorios –resultados mayores a 0.05 indican que no es posible rechazar la hipótesis nula (*random effects*). Al igual que para las hipótesis anteriores se corrieron modelos alternativos sin registrar grandes cambios en los resultados. Es importante aclarar que otros trabajos sobre el voto económico a nivel subnacional en Argentina –que trabajaron con las mismas fuentes y construyeron indicadores similares (como Remmer & Gélinau, 2003)– también corrieron distintos modelos para comparar resultados y escapar a la discusión sobre los efectos de especificación.

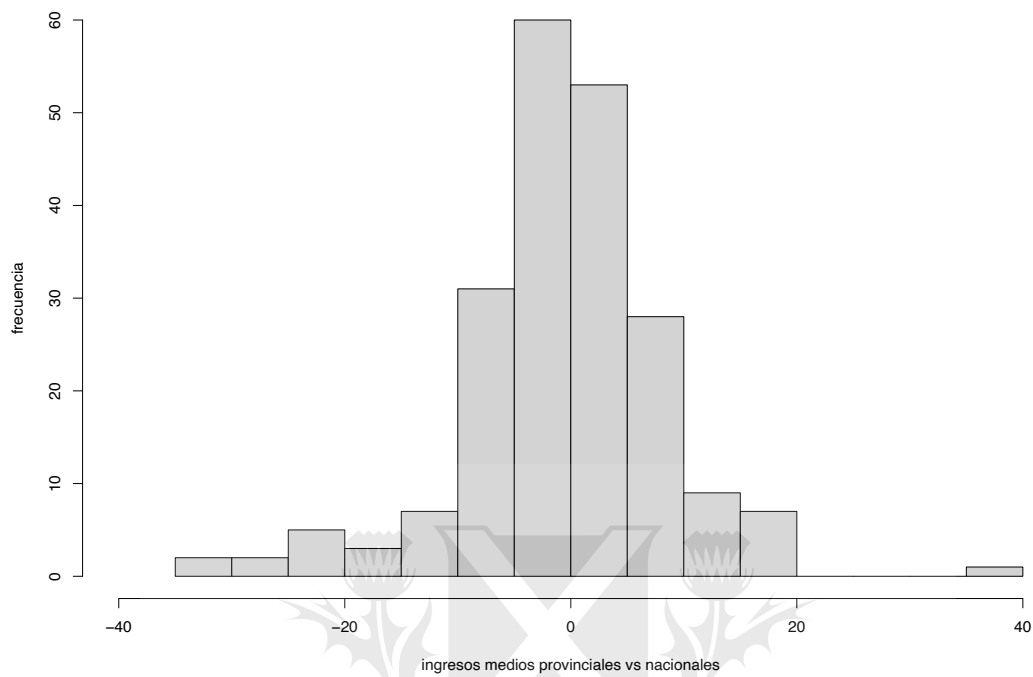
Estadística descriptiva

Las figuras 2-5 exponen una representación visual de la distribución de las variables explicativas. Las variables *ingresos*, *desempleo* y *crecimiento* respetan el supuesto de normalidad (Stock & Watson, 2010), pero la variable *peso del Estado* no. Las figuras 6-9 son diagramas de cajas permiten analizar como cada provincia se desvía de la media nacional en términos de *ingresos*, *desempleo*, *crecimiento* y *peso del Estado provincial en la economía*. La línea negra vertical dentro de cada caja representa la mediana, los bordes izquierdo y derecho representan los percentiles 25 y 75 respectivamente, y los extremos del bigote representan el valor mínimo y máximo de la variable dentro de la provincia, con los *outliers* representados por los puntos por fuera de la línea⁶⁸. En la base de datos cada provincia tiene un $N=9$ con las excepciones de 6 para CABA, 7 para Tierra del Fuego, Corrientes y Santiago del Estero, y 10 para Catamarca. Los bigotes y los *outliers* en los diagramas indican que hay variación intraprovincial e interprovincial de las variables principales. Además, en todos los casos existen provincias similares con valores distintos y viceversa –por ejemplo Mendoza y Santa Fe en términos de ingresos y desempleo respectivamente entre las provincias industriales, Jujuy en cuanto al desempleo de las provincias agrícolas, y La Rioja y Neuquén con respecto al crecimiento económico de las provincias agrícolas y extractivas respectivamente. También cabe destacar que, con algunas pocas excepciones⁶⁹, las provincias no modificaron su *status* de autonomía-dependencia para con el gobierno central y que, probablemente, tampoco no lo haya hecho la participación del sector privado en la generación de riqueza dentro de la provincia en comparación con la del Estado.

⁶⁸ Las abreviaturas son: BUE (Buenos Aires), CAB (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), CAT (Catamarca), CBA (Córdoba), CHA (Chaco), CHU (Chubut), COR (Corrientes), ERI (Entre Ríos), FOR (Formosa), JUJ (Jujuy), LPA (La Pampa), LRJ (La Rioja), MIS (Misiones), MZA (Mendoza), NQN (Neuquén), RNE (Rio Negro), SAL (Salta), SCR (Santa Cruz), SDE (Santiago del Estero), SFE (Santa Fe), SJU (San Juan), SLU (San Luis), TDF (Tierra del Fuego), TUC (Tucumán).

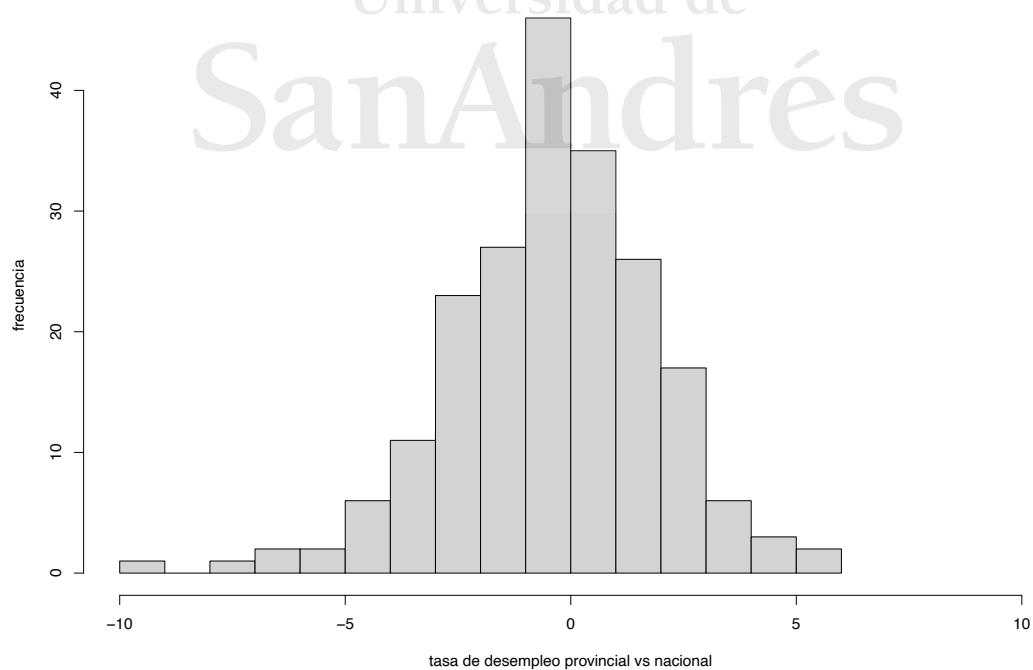
⁶⁹ CABA (2019), BUE (1987 y 2015), MZA (1987), RNE (1987), SCR (2015, 2019), SJU (1987) y TUC (2019).

Figura 2



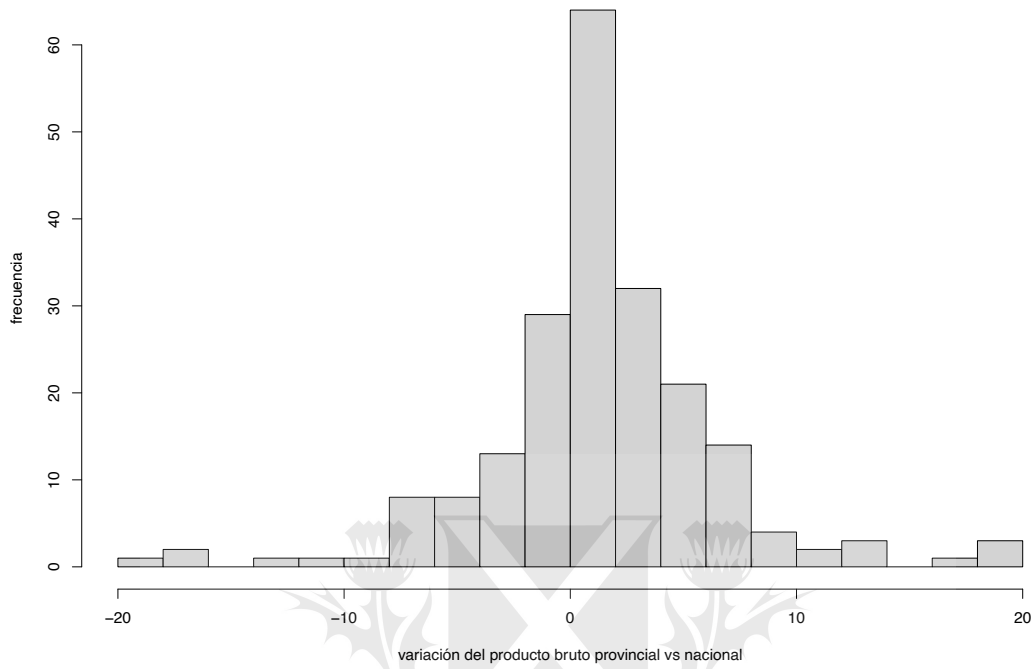
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

Figura 3



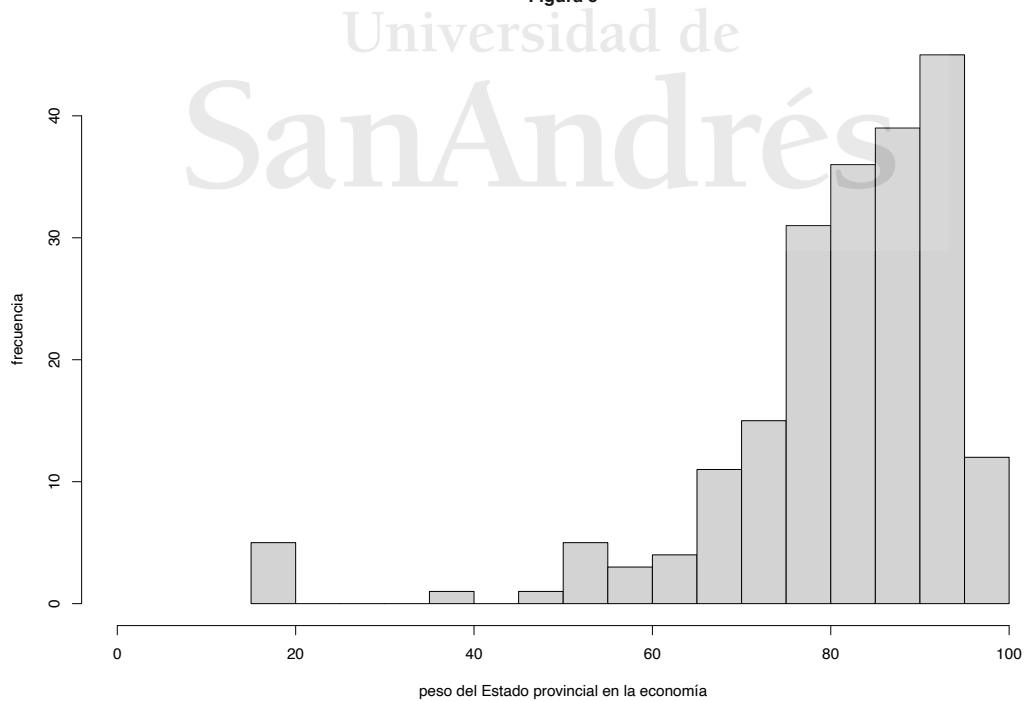
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

Figura 4



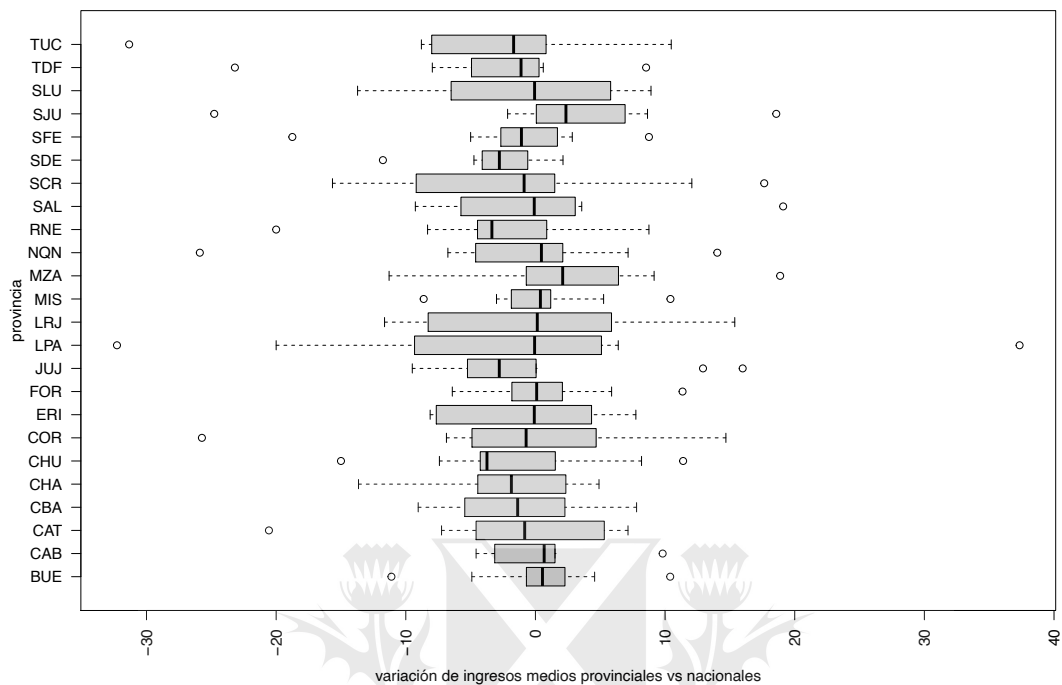
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la Fundación Norte y Sur.

Figura 5



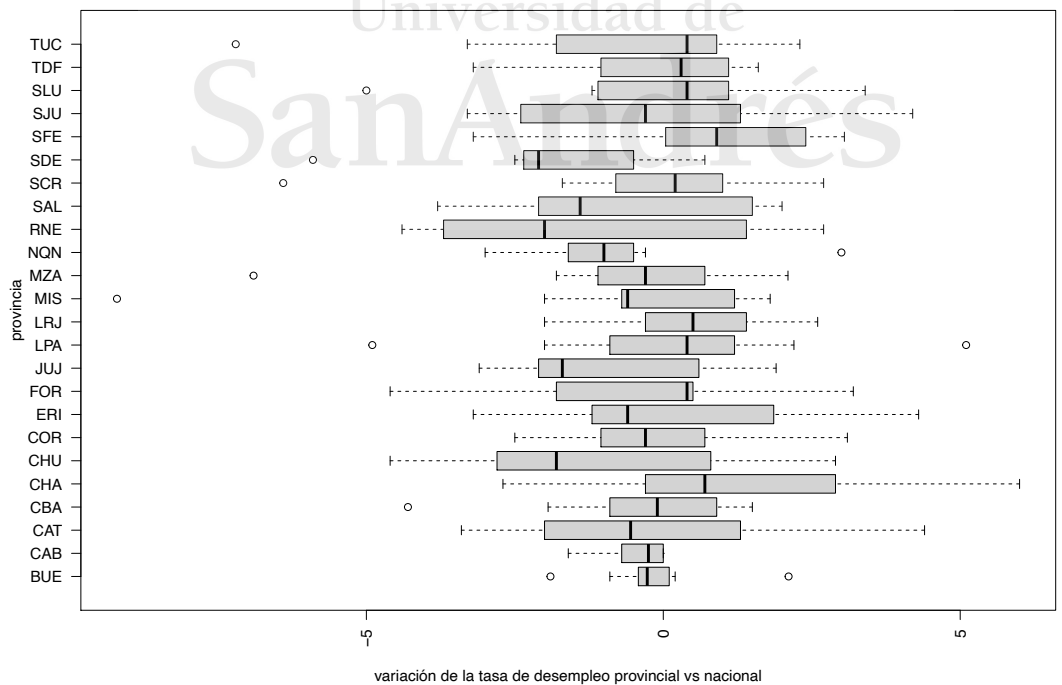
Fuente: elaboración propia en base a datos de DNAP.

Figura 6



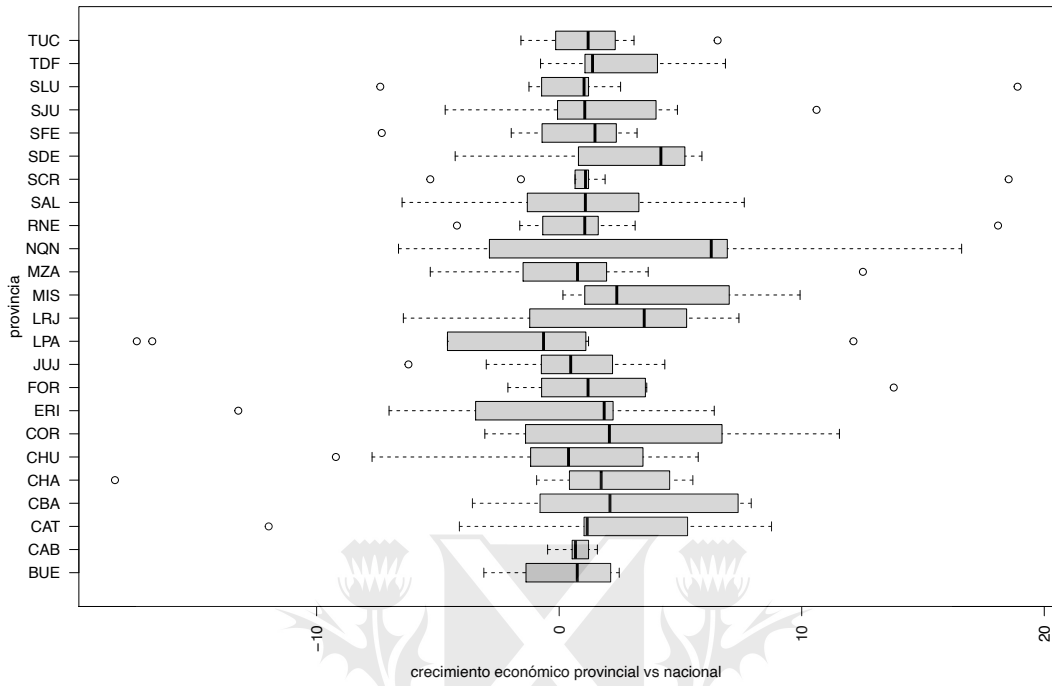
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

Figura 7



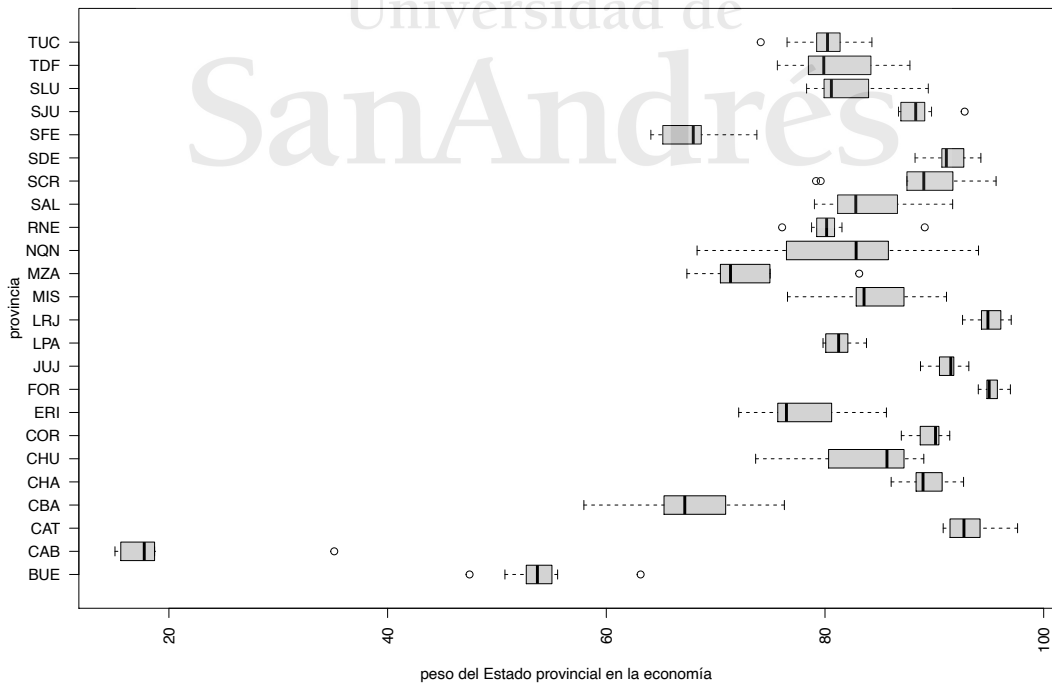
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

Figura 8



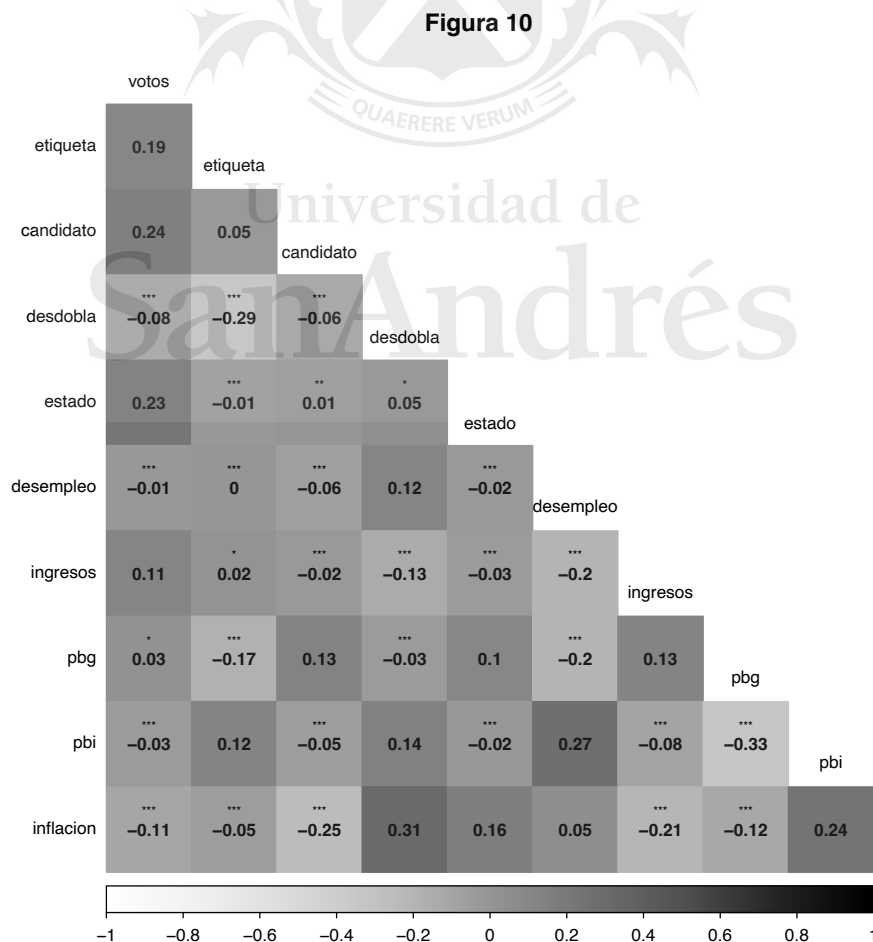
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y la Fundación Norte y Sur.

Figura 9



Fuente: elaboración propia en base a datos de DNAP.

La figura 10 es una matriz de correlación que incluye a todas las variables del trabajo con el objetivo de chequear colinealidad entre variables explicativas y reflexionar sobre algunos patrones. Tomando como referencia que una correlación débil es aquella en la que el coeficiente de Pearson $R < 0.3$, moderada $0.3 < R < 0.5$ y fuerte $R > 0.5$, solo PBI ~ PBG (-0.33) resulta una combinación moderada y estadísticamente significativa. Además, la relación débil entre crecimiento económico provincial y tasa de desempleo (-0.20) resulta lógicamente negativa porque es probable que un menor desempleo se traduzca en un mayor PBG. La correlación entre ingresos e inflación también es débil (-0.21) y significativa. En cuanto a las variables políticas resulta interesante el coeficiente negativo entre *desdoblamiento* y *etiqueta* (-0.29). Da entender que los copartidarios del gobierno nacional en las provincias suelen desdoblar las elecciones más frecuentemente que los oficialismos provinciales opositores a escala nacional. Esto parecería contraintuitivo pero es consistente con el contexto: como Argentina es un país con un ambiente económico constantemente problemático que sigue el modelo de *referendum voting*, tiene sentido que los gobernadores copartidarios del oficialismo nacional, cuyo desempeño económico es generalmente malo, busquen protegerse del efecto derrame negativo en torno a las evaluaciones sobre la economía nacional.



V) Resultados

La tabla 1 a continuación presenta los resultados correspondientes al testeo de H1, H2 y H3⁷⁰. En complemento, la tabla 2 presenta los resultados obtenidos al correr los mismos modelos utilizando efectos de especificación alternativos (aleatorios). En ambas tablas los modelos (1), (3), (5), y (7) incluyen a todas las provincias mientras que los modelos (2), (4), (6) y (8) solo incluyen a provincias agrícolas y extractivas.

Tabla 1 - Relacion entre economia y elecciones (OLS con efectos fijos)

	<i>Dependent variable:</i>							
	Performance electoral (en % de votos obtenidos)							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ingresos	0.165 (0.100)	0.106 (0.115)	0.145 (0.097)	0.114 (0.110)				
Desempleo	0.251 (0.408)	-0.136 (0.484)			0.134 (0.400)	-0.240 (0.469)		
Crec provincial	-0.109 (0.181)	0.004 (0.215)					-0.085 (0.180)	0.037 (0.212)
Crec nacional	-0.070 (0.194)	0.010 (0.244)	-0.005 (0.179)	-0.012 (0.217)	-0.030 (0.187)	0.019 (0.230)	-0.041 (0.189)	-0.004 (0.233)
Inflacion	-0.021 (0.019)	-0.028 (0.024)	-0.022 (0.019)	-0.027 (0.024)	-0.027 (0.019)	-0.032 (0.023)	-0.028 (0.019)	-0.031 (0.023)
Etiqueta	3.753* (2.051)	2.205 (2.529)	3.788* (2.028)	2.273 (2.498)	3.720* (2.043)	1.996 (2.507)	3.581* (2.049)	2.110 (2.503)
Candidatura	5.172*** (1.913)	5.874** (2.306)	4.972*** (1.891)	5.890** (2.276)	4.755** (1.897)	5.676** (2.274)	4.831** (1.907)	5.636** (2.285)
Desdoblamiento	0.499 (2.366)	2.195 (2.923)	0.749 (2.340)	2.068 (2.839)	0.619 (2.367)	2.219 (2.879)	0.625 (2.359)	2.080 (2.886)
Provincias	todas	s/ind	todas	s/ind	todas	s/ind	todas	s/ind
Efectos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos
Observations	208	157	208	157	208	157	208	157
R ²	0.096	0.099	0.092	0.099	0.081	0.093	0.082	0.092
Adjusted R ²	-0.063	-0.073	-0.056	-0.057	-0.068	-0.064	-0.068	-0.066
F Statistic	2.343** (df = 8; 176)	1.802* (df = 8; 131)	3.012*** (df = 6; 178)	2.425** (df = 6; 133)	2.629** (df = 6; 178)	2.275** (df = 6; 133)	2.649** (df = 6; 178)	2.233** (df = 6; 133)

Note:

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

⁷⁰ H1: el porcentaje de votos obtenidos por el candidato oficialista será mayor cuando la economía provincial mejora / H2: el porcentaje de votos obtenidos por el candidato oficialista será mayor cuando la economía nacional mejora / H3: el efecto de la performance económica local sobre el porcentaje de votos obtenidos por el candidato oficialista será mayor en provincias donde predomina la industria y menor en provincias donde predominan actividades agrícolas y extractivas.

Los coeficientes de la tabla 1 indican que tanto el desempeño económico nacional como subnacional (en ninguna de sus variantes de medición) no resultan estadísticamente significativos a la hora de predecir la performance electoral de los candidatos oficialistas. Tampoco se reportan diferencias entre los modelos que incluyen y excluyen a las provincias industriales. En cuanto a los controles electorales, el desdoblamiento de las elecciones no tiene un efecto significativo en ninguno de los modelos mientras que la candidatura lo hace en todos –es decir que si el candidato oficialista es el gobernador, el partido recibe en promedio 5.36 puntos adicionales. Además, la etiqueta resulta significativa en los modelos completos (valor promedio 3.71) pero no en los modelos que excluyen a las provincias industriales –esto indica que para los oficialismos en las provincias agrícolas y extractivas compartir etiqueta partidaria o signo político con el partido oficialista a nivel nacional no supone ninguna ventaja.

Tabla 2 - Relacion entre economia y elecciones (OLS con efectos aleatorios)

	<i>Dependent variable:</i>							
	Performance electoral (en % de votos obtenidos)							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ingresos	0.174* (0.102)	0.141 (0.117)	0.160 (0.099)	0.146 (0.112)				
Desempleo	0.231 (0.411)	-0.109 (0.487)			0.107 (0.402)	-0.239 (0.469)		
Crec provincial	-0.053 (0.183)	0.033 (0.216)					-0.026 (0.182)	0.077 (0.214)
Crec nacional	-0.101 (0.199)	-0.058 (0.249)	-0.057 (0.184)	-0.082 (0.223)	-0.077 (0.191)	-0.046 (0.233)	-0.075 (0.194)	-0.072 (0.240)
Inflacion	-0.011 (0.020)	-0.015 (0.024)	-0.012 (0.020)	-0.015 (0.024)	-0.018 (0.019)	-0.022 (0.024)	-0.018 (0.019)	-0.019 (0.024)
Etiqueta	4.487** (1.966)	3.948* (2.399)	4.532** (1.940)	3.846 (2.371)	4.465** (1.951)	3.485 (2.381)	4.461** (1.970)	3.978* (2.391)
Candidatura	5.785*** (1.881)	6.022*** (2.317)	5.662*** (1.857)	6.058*** (2.277)	5.413*** (1.862)	5.795** (2.267)	5.481*** (1.879)	5.764** (2.313)
Desdoblamiento	0.286 (2.294)	1.688 (2.838)	0.418 (2.277)	1.594 (2.782)	0.218 (2.295)	1.631 (2.803)	0.238 (2.293)	1.463 (2.824)
Constant	45.223*** (2.675)	44.947*** (3.292)	44.931*** (2.612)	45.202*** (3.200)	45.431*** (2.639)	45.452*** (3.252)	45.371*** (2.661)	45.255*** (3.255)
Provincias	todas	s/ind	todas	s/ind	todas	s/ind	todas	s/ind
Efectos	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios
Observations	208	157	208	157	208	157	208	157
R ²	0.092	0.093	0.090	0.093	0.079	0.084	0.079	0.083
Adjusted R ²	0.055	0.044	0.063	0.056	0.051	0.048	0.051	0.047
F Statistic	21.616***	15.862**	21.381***	15.930**	18.571***	14.358**	18.650***	14.259**

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

La tabla 2 presenta dos pequeñas diferencias: la etiqueta adquiere significancia estadística en los modelos incompletos (2) y (8), y la variable ingresos lo hace en el modelo (1) –lo cual significa que una mejora de 1 punto en los ingresos provinciales por sobre los nacionales aumenta el retorno electoral del oficialismo provincial en 0.17-0.18%. Esta asociación débil es, de cualquier manera, bastante cuestionable ya no se replica en el modelo (3) –que mide Δ ingresos sin incluir todas las otras variables de la economía provincial.

La tabla 3 presenta los resultados correspondientes al testeo de H4⁷¹ y la tabla 4 los complementa con los resultados de los modelos con efectos aleatorios. Los modelos (1), (5) y (9) refieren a las provincias en el primer cuartil de la variable *peso del Estado en la economía*, los modelos (2), (6) y (10) a aquellas ubicadas en el segundo cuartil, los modelos (3), (7) y (11) a las del tercero, y (4), (8) y (12) a las del cuarto.

Tabla 3 - Relacion entre economia y elecciones segun el peso del Estado (OLS con efectos fijos)

	Dependent variable:											
	Performance electoral (en % de votos obtenidos)											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Ingresos	0.183 (0.206)	0.136 (0.211)	-0.156 (0.292)	0.286 (0.237)								
Desempleo					0.656 (0.659)	-0.050 (0.958)	0.504 (0.993)	-0.760 (1.028)				
Crec provincial									-0.190 (0.399)	-0.528 (0.510)	0.383 (0.588)	0.136 (0.375)
Crec nacional	-0.469* (0.265)	0.286 (0.571)	0.076 (0.444)	-0.019 (0.385)	-0.424 (0.264)	0.316 (0.583)	-0.044 (0.483)	0.063 (0.431)	-0.468* (0.270)	0.180 (0.578)	0.120 (0.452)	-0.022 (0.417)
Inflacion	0.038 (0.030)	-0.016 (0.066)	-0.036 (0.054)	-0.082** (0.038)	0.027 (0.029)	-0.033 (0.061)	-0.017 (0.054)	-0.071* (0.038)	0.023 (0.033)	-0.040 (0.060)	-0.032 (0.052)	-0.073* (0.038)
Etiqueta	4.524 (2.865)	-2.501 (9.022)	5.828 (4.331)	0.416 (4.681)	-5.676* (2.907)	-4.021 (8.765)	6.191 (4.329)	-0.614 (4.703)	4.802 (2.864)	-4.946 (8.673)	7.379 (4.778)	0.051 (4.883)
Candidatura	5.078 (3.046)	12.122** (4.960)	3.531 (4.854)	2.047 (4.337)	5.179* (3.044)	12.552** (4.958)	4.545 (4.826)	2.729 (4.453)	4.894 (3.061)	14.272*** (5.132)	2.066 (5.654)	2.220 (4.422)
Desdoblamiento	1.246 (3.405)	6.921 (5.810)	-3.453 (5.885)	-2.028 (4.419)	0.488 (3.390)	7.004 (5.899)	-4.746 (6.407)	-2.434 (4.472)	1.254 (3.501)	5.001 (6.058)	-2.479 (6.062)	-2.049 (4.575)
Efectos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos
Observations	53	51	53	51	53	51	53	51	53	51	53	51
R ²	0.238	0.244	0.157	0.220	0.242	0.235	0.157	0.199	0.226	0.259	0.161	0.189
Adjusted R ²	-0.132	-0.145	-0.414	-0.182	-0.126	-0.159	-0.415	-0.214	-0.150	-0.123	-0.407	-0.229
F Statistic	1.823 (df = 6; 35)	1.780 (df = 6; 33)	0.964 (df = 6; 31)	1.550 (df = 6; 33)	1.865 (df = 6; 35)	1.690 (df = 6; 33)	0.959 (df = 6; 31)	1.364 (df = 6; 33)	1.702 (df = 6; 35)	1.923 (df = 6; 33)	0.992 (df = 6; 31)	1.279 (df = 6; 33)

Note:

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

⁷¹ H4: el efecto de la performance económica local sobre el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor en provincias donde el peso del Estado en la economía es menor, y viceversa.

Los coeficientes en la tabla 3 indican que la evolución de la economía provincial no afecta significativamente el desempeño electoral de los candidatos oficialistas en ningún cuartil. En cambio, el desempeño económico nacional es estadísticamente significativo vía crecimiento en 2 de 3 modelos referentes a las provincias en 1er cuartil, y vía inflación en todos los modelos referentes a las provincias en el 4to cuartil, ambas con coeficiente negativo –lo cual llama la atención en el caso del crecimiento.

Tabla 4 - Relacion entre economia y elecciones segun el peso del Estado (OLS con efectos aleatorios)

	Dependent variable:											
	Performance electoral (en % de votos obtenidos)											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Ingresos	0.149 (0.197)	0.290 (0.201)	-0.136 (0.247)	0.335* (0.199)								
Desempleo					1.023* (0.611)	0.570 (0.951)	-0.301 (0.824)	-0.925 (0.973)				
Crec provincial									-0.160 (0.390)	-0.289 (0.493)	-0.054 (0.393)	0.358 (0.345)
Crec nacional	-0.489* (0.260)	0.289 (0.501)	0.104 (0.402)	-0.285 (0.378)	-0.458* (0.255)	0.170 (0.515)	0.141 (0.435)	-0.170 (0.431)	-0.486* (0.262)	0.134 (0.530)	0.063 (0.415)	-0.179 (0.419)
Inflacion	0.040 (0.031)	-0.034 (0.060)	-0.015 (0.045)	-0.075** (0.037)	0.028 (0.029)	-0.058 (0.059)	-0.008 (0.043)	-0.067* (0.038)	0.027 (0.033)	-0.064 (0.059)	-0.005 (0.042)	-0.069* (0.038)
Etiqueta	5.413* (2.770)	5.172 (4.771)	3.328 (3.820)	4.102 (3.835)	6.470** (2.726)	4.746 (4.877)	3.166 (3.860)	3.778 (3.944)	5.547** (2.761)	4.712 (4.884)	3.276 (3.897)	5.134 (4.004)
Candidatura	5.358* (2.864)	5.334 (4.538)	3.832 (4.131)	5.277 (4.039)	5.451* (2.790)	4.860 (4.612)	3.823 (4.159)	6.210 (4.173)	5.133* (2.853)	5.346 (4.734)	4.373 (4.421)	5.602 (4.113)
Desdoblamiento	0.995 (3.331)	4.494 (5.239)	-4.813 (5.125)	0.109 (4.545)	0.388 (3.260)	4.149 (5.344)	-4.199 (5.380)	-0.639 (4.625)	1.032 (3.401)	3.879 (5.386)	-4.759 (5.141)	0.096 (4.658)
Constant	36.237*** (4.011)	42.295*** (5.581)	49.040*** (6.207)	56.483*** (5.029)	37.066*** (3.855)	43.692*** (5.656)	48.276*** (6.272)	55.570*** (5.212)	36.784*** (4.112)	43.681*** (5.656)	48.689*** (6.223)	54.280*** (5.523)
Efectos aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios	aleatorios
Observations	53	51	53	51	53	51	53	51	53	51	53	51
R ²	0.366	0.140	0.153	0.304	0.384	0.107	0.126	0.274	0.362	0.106	0.147	0.277
Adjusted R ²	0.283	0.023	0.043	0.209	0.304	-0.015	0.012	0.175	0.279	-0.015	0.036	0.178
F Statistic	13.050**	7.177	5.096	19.234***	15.817**	5.255	4.675	16.620**	12.568*	5.238	4.779	16.855***

Note:

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

La tabla 4 reporta los resultados de los modelos por cuartil con efectos aleatorios sin grandes cambios. La significancia del crecimiento nacional en provincias del primer cuartil y de la inflación en las del cuarto se mantienen, mientras que los ingresos provinciales adquieren significancia estadística en las provincias del último cuartil y el desempleo lo hace en las del primero (aunque con signo positivo).

VI) Conclusión

La atribución de responsabilidades del electorado hacia los gobernantes es un concepto clave para la representación democrática (Tagina, 2012), y el hecho de que los votantes puedan evaluar el desempeño de los funcionarios y expulsarlos cuando no es óptimo es necesario para que este mecanismo funcione de manera adecuada (Manin, Przeworski & Stokes, 1999). En esta línea, la retrospección sobre la evolución de la economía es importante en tanto “es la heurística más simple para evaluar competencia” (Campello & Zucco, 2020; pp. 3) en aquellos países donde las etiquetas partidarias y las campañas vacías no proveen atajos cognitivos a los votantes para evaluar la calidad de los representantes y candidatos –y especialmente si los principales problemas del país son económicos. De esta manera los votantes mal informados, desinteresados, o confundidos podrían llegar a triunfar en su búsqueda de funcionarios competentes a través del voto económico, un comportamiento muy propio de la política latinoamericana (Stokes, 2001).

En países federales descentralizados “el control de los ciudadanos sobre los políticos es, a lo mejor, altamente imperfecto” (Manin, Przeworski & Stokes, 1999; pp. 50) porque atribuir responsabilidades entre los niveles es difícil (Anderson, 2000; Rodden & Wibbels, 2011). Para emitir un voto económico efectivo –es decir asignar racionalmente el apoyo en las urnas seleccionando candidatos competentes– los votantes deben lograr una comparación lógica (Kayser & Peress, 2012) de la evolución de la economía en su provincia con el promedio del país (Orth, 2001). Si esto no sucede, los funcionarios no tienen incentivos suficientes para gestionar la economía provincial de manera eficiente y, en consecuencia, se deteriora la calidad de la provisión de bienes y servicios públicos en el distrito (Gélineau & Remmer, 2006) y empeora la calidad de vida de las personas. Este trabajo se dedicó a estudiar este escenario en Argentina, donde las provincias tienen gran responsabilidad y autonomía sobre el diseño y la ejecución de las políticas públicas.

Un amplio cuerpo de literatura académica comprueba fuertemente la relación entre política y economía a nivel nacional: a lo largo y ancho del mundo los votantes utilizan la evolución de algunos indicadores económicos para evaluar la competencia del presidente y su administración y decidir si apoyarlos o no en las próximas elecciones. De allí se esperaría que todos los *incumbents* se beneficien de los buenos tiempos económicos y se perjudiquen de los malos, igual que lo hacen los votantes. A nivel subnacional la literatura es más acotada y encuentra evidencia a favor y en contra de la existencia de tal mecanismo; una parte postula que el apoyo electoral a los gobernadores depende fuertemente de la evaluación que hacen los votantes de la situación económica nacional, y otra que los votantes evalúan a los gobernadores de manera retrospectiva en base a la economía provincial (ver *Introducción* para las citas).

Para el caso argentino, los últimos estudios de esta índole abarcan los periodos 1983-1999 (Remmer & Gélinau, 2003) y 1983-2001 (Gélinau & Remmer, 2006) y encuentran que el voto económico subnacional se basa fuertemente en el modelo de *referendum voting*, aunque existe un nivel bastante bajo de *accountability* electoral si no lo hacen. Recientemente, Barberia, Avelino & Zanlorenssi (2019) demuestran que en Brasil los votantes responsabilizan más fuertemente al gobernador por la economía en estados con mayor capacidad de financiamiento propio, y donde predominan la industria y los servicios por sobre la agricultura y la materia prima –en línea con los resultados de Ebeid & Rodden (2006) para Estados Unidos– y que, más específicamente, los recompensan por la mejora del desempleo por sobre el promedio nacional⁷².

Este trabajo prueba cuatro hipótesis: (H1) el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor cuando la economía provincial mejora; (H2) el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor cuando la economía nacional mejora; (H3) el efecto de la performance económica local sobre el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor en provincias donde predominan la industria y los servicios y menor en provincias donde predominan actividades agrícolas y extractivas; y (H4) el efecto de la performance económica local sobre el porcentaje de votos obtenidos por el gobernador o su candidato será mayor en provincias donde el peso del Estado en la economía es menor y viceversa.

En general los resultados sugieren que tanto el desempeño económico de la administración subnacional en términos relativos (H1) como la evolución de la economía nacional (H2) no afectan la cantidad de votos obtenidos por los gobernadores que buscan su reelección u otros candidatos oficialistas en las provincias argentinas. Esto concuerda con los trabajos preexistentes que no encuentran evidencia de que el apoyo electoral a los gobernadores dependa de la evaluación que hacen los votantes de la evolución de la economía local, pero al mismo tiempo los confronta en tanto tampoco encuentra un efecto considerable de la situación económica nacional en los resultados electorales subnacionales. Uno podría decir que los resultados son esperables puesto que en Argentina conviven problemas económicos constantes con tasas de reelección altas, pero también existe la posibilidad de que los gobernadores (y sus partidos) sean castigados por la situación económica sin que pierda la reelección –e.g. si un gobernador con un manejo económico malo pasa de ganar con 65% de los votos a hacerlo con 45-50%.

En particular, no se encuentra evidencia de que el tipo de estructura económica funcione como variable mediadora del voto económico subnacional ya que no hay diferencias en los resultados entre provincias con estructuras económicas y productivas diferentes (H3) –esto se opone a otros estudios realizados en otros

⁷² Argentina es el 8vo país y la tercera federación presidencialista democrática más extensa territorialmente después de Estados Unidos (4to) y Brasil (5to) –sacando a Rusia (1ra) que es semi-presidencialista y no está contemplada como una democracia según las mediciones de *Polity Project* ni *Democracy Index*.

países federales como Estados Unidos (Ebeid & Rodden, 2006) y Brasil (Barberia, Avelino & Zanlorenssi, 2019). Sí se encuentra al menos un poco de evidencia de que el peso del Estado provincial funciona como mediador del voto económico subnacional (H4) –en línea con los trabajos mencionados anteriormente. La evolución de los ingresos medios es estadísticamente significativa en los modelos alternativos únicamente para aquellas provincias donde el peso del Estado en la economía es más alto –por cada punto porcentual que aumenta el ingreso medio de la provincia por sobre el ingreso nacional la recompensa electoral es de 0.3-0.4%. Lo mismo sucede con la evolución de la tasa de desempleo provincial por sobre la media nacional en las provincias con un peso del Estado provincial relativamente bajo, aunque de forma contraintuitiva: el signo positivo indica que la recompensa electoral aumenta 1.02% por cada punto de desempleo provincial por sobre el promedio nacional, algo totalmente opuesto a lo que encontraron Barberia, Avelino y Zanlorenssi (2019) para Brasil –que los *incumbents* que bajan el desempleo por sobre la media nacional en estados industriales reciben más apoyo en las urnas.

Por otra parte, se encuentra que la evolución de la economía nacional afecta los resultados electorales de las provincias, pero muy poco y dependiendo del peso del Estado provincial en la actividad económica. El crecimiento económico nacional resulta significativo en aquellas provincias donde el peso del Estado en la economía provincial es relativamente bajo, pero el signo negativo indica que cada punto de crecimiento se traduce, en promedio, en detrimento de 0.47-0.48% en los votos al oficialismo provincial. Y la inflación lo hace aquellas provincias donde es relativamente alto; un punto de inflación se traduce en -0.07% en términos de votos, lo cual significa que los gobernadores argentinos son casi electoralmente inmunes a los saltos inflacionarios, incluso si les corresponde cierta responsabilidad por los mismos (Rodden & Wibbels, 2002) –una inflación anual del 50% significaría una pérdida de solamente -3.5% de los votos a los candidatos oficialistas provinciales, alineados o no con el gobierno nacional.

De los resultados también se pueden inferir algunas cuestiones con respecto a las variables políticas, incluidas que el desdoblamiento de las elecciones con las nacionales no afecta el porcentaje de votos obtenidos por el oficialismo provincial, y que la candidatura del gobernador por sobre la de otro candidato si lo hace. Además, la alineación de la etiqueta partidaria del oficialismo provincial con el nacional pierde potencia en provincias agrícolas y extractivas, y probablemente solo afecte el desempeño electoral de los *incumbents* en provincias industriales –la variable solo es estadísticamente significativa en los modelos completos. Estos resultados reflejan y apoyan la alta tasa de candidatura y reelección entre los gobernadores, cuestiona el desdoblamiento de las elecciones provinciales en términos electorales, y pone en duda los resultados de aquellos trabajos que encuentran un efecto de la economía nacional sobre la performance electoral de los candidatos subnacionales del mismo partido.

Por último, el trabajo reafirma y discute, en cierto punto, otras dos cuestiones subyacentes. La primera tiene que ver con el poder de los gobernadores y propone que enfrentar poca (o ninguna) responsabilidad por el desempeño económico de la provincia podría contribuir a que tengan incentivos fuertes para destinar una cantidad desproporcionada de los recursos públicos para mantener y solidificar su posición de poder y privilegio en vez de dirigirlos hacia el ahorro o la mejora de los bienes y servicios públicos. La segunda cuestiona los supuestos beneficios de la descentralización –más democracia y mejor *accountability* al llevar el gobierno más cerca de las personas (Falleti, 2010) y más desarrollo económico (Weingast, 1995) y un mejor uso de los recursos fiscales gracias al mejor conocimiento de las preferencias locales por parte de las autoridades (Tiebout, 1956, Oates, 1999; Shah, 2006). Los resultados se inclinan más hacia reafirmar los posibles efectos adversos de la descentralización: la creación de élites gobernantes que fuerzan relaciones de patronazgo y se benefician de prácticas clientelares a nivel local (Falleti, 2010; Stokes *et al*, 2013; Oliveros, 2021) y el deterioro de la macroeconomía nacional producto del poco control en el gasto público provincial (Rodden & Wibbels, 2002; Gélinau & Remmer, 2006).

En resumen, en Argentina el voto económico retrospectivo como mecanismo de rendición de cuentas electoral y selección de candidatos competentes a nivel subnacional es débil. Trabajos futuros deberían moverse en dos direcciones: la primera es identificar cual es la razón por la cual los votantes no son capaces de evaluar la economía local de manera tal que aumente la rendición de cuentas electoral. A nivel nacional, Campello y Zucco (2020) sostienen que el fenómeno de *misattribution* “es un problema de capacidades cognitivas más que de falta de información” (pp. 28), es decir que los votantes no saben cómo usar la información disponible o deciden no hacerlo por afecto a los líderes y los partidos políticos. A nivel provincial en Argentina la falta de información y/o la información sesgada a favor de los oficialismos es moneda corriente (ver Gervasoni, 2021; pp. 42-66 para algunos ejemplos) y podría ser una alternativa.

La segunda dirección es estudiar si para los votantes la competencia de los funcionarios subnacionales se refleja de otra forma, en tanto la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno “abarca mucho más que el estado de la economía” (King, 2001; pp. 594) aunque la literatura le asigne un rol central. Álvarez, Nagler y Willette (2000) sugieren que, dada la fuerte correlación que existe entre los cambios en la situación económica y el desempeño electoral de los *incumbents*, los votantes podrían estar dando a los funcionarios electos un margen indebido en lo que respecta al desempeño de las funciones y el resultado de las políticas no económicas. Tal vez en las provincias argentinas suceda lo contrario, y los votantes sean indiferentes ante (o poco propensos a evaluar) el desempeño económico en comparación con el resultado de otras políticas –como las de seguridad, educación y salud– sin identificar que estas son, en el mediano y largo plazo, altamente dependientes de la situación económica. Incursionar en la rendición de cuentas electoral por fuera de lo económico es tan importante como interesante.

Bibliografía

- Abrucio, F. (1998). *Os barões da federação: os governadores e a redemocratização brasileira*. San Pablo, USP.
- Achen, C., & Bartels, L. (2004). *Blind Retrospection: Electoral Responses to Drought, Flu, and Shark Attacks*.
- Achen, C., & Bartels, L. (2012). *Blind Retrospection: Why Shark Attacks Are Bad For Democracy*. Vanderbilt University Center for the Study of Democratic Institutions.
- Achen, C., & Bartels, L. (2016). *Democracy for Realists: Why elections do not produce responsive governments*. Princeton University Press.
- Adams, J., & Kenny, L. (1989). *The Retention of State Governors*. Public Choice 62, 1-13.
- Alcañiz, I., & Hellwig, T. (2011). *Who's to Blame? The Distribution of Responsibility in Developing Democracies*. British Journal of Politics 41, 389-411.
- Alexander, J. (2004). *Federal Reforms in Russia: Putin's Challenge to the Republics*.
- Alvarez, R., Nagler, J., & Willette, J. (2000). *Measuring the relative impact of issues and the economy in democratic elections*. Harvard Electoral Studies 19, 237-253.
- Anderson, C. (1995). *Blaming the government: citizens and the economy in five European democracies*. M.E. Sharpe.
- Anderson, C. (2000). *Economic voting and political context: a comparative perspective*. Electoral Studies 19, 151-170.
- Anderson, C. (2007). *The End of Economic Voting? Contingency Dilemmas and the Limits of Democratic Accountability*. Annual Review of Political Science.
- Anderson, C., Mendes, S., & Tverdova, Y. (2004). *Endogenous economic voting: evidence from the 1997 British election*. Electoral Studies 23, 683-708.
- Andrews, M., & Shah, A. (2003). *Assessing Local Government Performance in Developing Countries*. En *Measuring Government Performance in the Delivery of Public Services*. Handbook on Public Sector Performance Reviews. The World Bank.
- Ardanaz, M., Leiras, M., & Tommasi, M. (2014). *The Politics of Federalism in Argentina and its Implications for Governance and Accountability*. World Development 53, 26-45.
- Ashworth S., & Bueno de Mesquita, E. (2014). *Is Voter Competence Good for Voters? Information, Rationality, and Democratic Performance*. The American Political Science Review 108, 565-587.
- Ashworth S., Bueno de Mesquita, E., & Friedenber, A. (2018). *Learning about Voter Rationality*. American Journal of Political Science 00, 1-18.
- Atkeson, L., & Partin, R. (1995). *Economic and Referendum Voting: a Comparison of Gubernatorial and Senatorial Elections*. American Political Science Review 89.
- Barbería, L., Avelino, G., & Zanlorenssi, G. (2019). *Economic Voting in Brazil's Gubernatorial Elections, 1994-2014*. Publius: The Journal of Federalism 49, 250-270.
- Bartels, L. (2002). *Beyond the Running Tally: Partisan Bias in Political Perceptions*. Political Behavior 24, 117-150.
- Behrend, J., & Bianchi, M. (2017). *Estructura Económica y Política Subnacional en Argentina*. Caderno CRH, 30(80), 217-235.
- Behrend, J., & Karamanef, L. (2021). *La variación subnacional en la respuesta socioeconómica a la pandemia en Argentina*. Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 36, UNSE.
- Benton, A. (2005). *Dissatisfied Democrats or Retrospective Voters? Economic Hardship, Political Institutions, and Voting Behavior in Latin America*. Comparative Political Studies 38, 417-442.
- Benton, A. (2008). *What Makes Strong Federalism Seem Weak? Fiscal Resources and Presidential-Provincial Relations in Argentina*. Publius 39, 651-676.
- Bloom, H., & Price, H. (1975). *Voter Response to Short-Run Economic Conditions: The Asymmetric Effect of Prosperity and Recession*. The American Political Science Review 69, 1240-1254.
- Boas, C., & Hidalgo, D. (2011). *Controlling the Airwaves: Incumbency Advantage and Community Radio in Brazil*. American Journal of Political Science 55, 869-885.
- Borello, J. (2015). *Complejos Productivos y Territorio en Argentina: aportes para el estudio de la geografía económica del país*. Trabajo de CEPAL y la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.
- Boyne, G., James, O., John, P., & Petrovsky, N. (2009). *Democracy and Government Performance: Holding Incumbents Accountable in English Local Governments*. The Journal of Politics 71, 1273-1284.
- Brusco, V., & Moscovich, L. (2018). *Political alignments and distributive politics at the municipal level in federal countries*. Revista Brasileira de Ciencia Política.
- Calvo, E., & Micozzi, J. (2005). *The Governor's Backyard: A Seat-Vote Model of Electoral Reform for Subnational Multiparty Races*. Journal of Politics 67, 1050-1074.

- Calvo, E., & Murillo, M. V. (2004). *Who delivers? Partisan clients in the Argentine electoral market*. *American Journal of Political Science*, 48(4), 742–757.
- Campbell, A., Converse, P., Miller, W., & Stokes, D. (1960). *The American Voter*. University of Chicago Press.
- Campello, D., & Zucco, C. (2020). *The Volatility Curse*. Cambridge University Press.
- Canton, D., & Jorrot, J. (2002). *Economic Evaluations, Partisanship and Social Bases of Presidential Voting in Argentina, 1995 and 1999*. *International Journal of Public Opinion Research* 14.
- Capello, M. (2020). *Autonomía fiscal de las provincias argentinas: ¿Cómo mejorar para lograr un mayor crecimiento económico?* Monitor Fiscal, IERAL Fundación Mediterránea 33.
- Carciofi R., & Carreras Mayer, P. (2019). *Gasto Público en Provincias Argentinas*. CIPPEC.
- Cardarello, A. (2011). *La búsqueda de saberse inmortal: la reelección inmediata de los ejecutivos subnacionales*. Ediciones Universitarias.
- Carlin, R., & Singh, P. (2015). *Executive Power and Economic Accountability*. *The Journal of Politics*, 77, 1031–1044.
- Carlsen, F. (2000). *Unemployment, inflation and government popularity: are there partisan effects?* *Electoral Studies* 19, 141-150.
- Carsey, T., & Wright, G. (1998). *State and National Factors in Gubernatorial and Senatorial Elections*. *American Journal of Political Science* 42, 994-1002.
- Cataife, G. (2011). *An Integrated Model of Vote Choice in Argentina*. *Latin American Politics and Society* 53.
- Catterberg, E. (1989). *Los argentinos frente a la política: cultura política y opinión pública en la transición argentina a la democracia*. Planeta.
- Catterberg, E. & Braun, M. (1989). “¿Izquierda y derecha en la opinión pública argentina?”. *Crítica & Utopía*, N° 18.
- Clerici, P. (2013). *Alianzas cruzadas en Argentina: una aproximación causal desde la teoría*. *Ciencia Política* 16, 8-33.
- Colomer, J. (1999). *Las instituciones del federalismo*. *Revista Española de Ciencia Política* 1, 41-54.
- Conover, J., Feldman, S., & Knight, K. (1986). *Judging Inflation and Unemployment: The Origins of Retrospective Evaluations*. *The Journal of Politics* 48, 565–588.
- Conover, J., Feldman, S., & Knight, K. (1987). *The Personal and Political Underpinnings of Economic Forecasts*. *American Journal of Political Science* 31, 559–583.
- Chzhen, K., Evans, G., & Pickup, M. (2013). *When do Economic Perceptions Matter for Party Approval? Examining the Endogeneity of Economic Perceptions Before and During the Economic Downturn*. *Political Behavior* 36, 291–313.
- Dahl, R. (1993). *La democracia y sus críticos*. Paidós Estado y Sociedad.
- Dassoneville, R., & Lewis-Beck, M. (2014). *Macroeconomics, Economic Crisis and Electoral Outcomes: A National European Pool*. *Acta Política* 49, 372–394.
- Del Cogiano, N., & Varetto, C. (2016). *Las elecciones subnacionales de 2015 en Argentina: estabilidad con cambio*. *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 25. 131-149.
- Diaz-Rioseco, D. (2016). *Blessing and Curse: Oil and Subnational Politics in the Argentine Provinces*. *Comparative Political Studies*, 1-35.
- Dorussen, H., & Taylor, M. (2003). *Economic Voting*. *Studies in European Political Science*.
- Dorussen, H., & Palmer, D. (2003). *The context of economic voting*. En Dorussen & Taylor (Eds.) *Economic Voting*.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Political Action in a Democracy*. *Journal of Political Economy* 65, 135–150.
- Duch, M., & Stevenson, R. (2006). *Assessing the magnitude of the economic vote over time and across nations*. *Electoral Studies* 25, 528-547.
- Duch, M., & Stevenson, R. (2008). *The Economic Vote*. Cambridge University Press.
- Duch, R., & Stevenson, R. (2010). *The Global Economy, Competency, and the Economic Vote*. *The Journal of Politics* 72, 105-123.
- Ebeid, M., & Rodden, J. (2006). *Economic Geography and Economic Voting: Evidence from the US States*. *British Journal of Political Science* 36, 527-547.
- Falletti, T. (2010). *Decentralization and Subnational Politics in Latinamerica*. Cambridge University Press.
- Fearon, J. (1999). *Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance*. En Manin, Przeworski & Stokes (Eds.) *Democracy, Accountability and Representation*. Cambridge University Press.
- Feierherd, G., & Lucardi, A. (2019). *¿Barones del Conurbano? Un Análisis Causal de la Performance Electoral de los Intendentes Bonaerenses*. *Foco Economico*.
- Feierherd, G., & Lucardi, A. (2021). *When the Partisan Becomes Personal: Mayoral Incumbency Effects in Buenos Aires*.

- Felsenstein, M. (2019). *La reelección de los intendentes bonaerenses: alianzas verticales y el efecto de la cancha inclinada*. Universidad de San Martín.
- Fernandez-Albertos, J., Kuo, A., & Balcells, L. (2013). *Economic Crisis, Globalization, and Partisan Bias: Evidence from Spain*. *International Studies Quarterly*, 1–13.
- Fiorina, M. (1978). *Retrospective Voting in American National Elections*. Yale University Press.
- Fornasari, F., Webb, S., & Zou, H. (2000). *The Macroeconomic Impact of Decentralized Spending and Deficits: International Evidence*. *Annual of Economics and Finance* 1, 403-433.
- Fortunato, D., Swift, C., & Williams, L. (2016). *All Economics is Local: Spatial Aggregations of Economic Information*. European Political Science Association.
- Foucault, M., Nadeau, R., & Lewis-Beck, M. (2011). *La persistencia de l'effet patrimoine lors des élections présidentielles françaises*. *French Journal of Political Science* 61, 659.
- Gelineau, F., & Remmer, K. (2006). *Political Decentralization and Electoral Accountability: The Argentine Experience, 1983–2001*. *British Journal of Political Science* 36, 133-157.
- Gelineau, F. (2007). *Presidents, Political Context, and Economic Accountability: Evidence from Latin America*. *Political Research Quarterly* 60, 415-428.
- Gervasoni, C. (2011). *Democracia, Autoritarismo e Hibridez en las Provincias Argentinas: La Medición y Causas de los Regímenes Subnacionales*. *Journal of Democracy*.
- Gervasoni, C., (2011). *Una Teoría Rentística de los Regímenes Subnacionales: Federalismo Fiscal, Democracia y Autoritarismo en las Provincias Argentinas*. *Desarrollo Económico* 50, 579-610.
- Gervasoni, C., (2021). *Hybrid Regimes within Democracies. Fiscal Federalism and Subnational Rentier States*. Cambridge University Press.
- Gervasoni, C., & Nazareno, M. (2017). *La Relación entre Gobernadores y Legisladores Nacionales*. *Política y Gobierno* 1, 9-44.
- Gervasoni, C., & Tagina, M. (2019). *Explaining Support for the Incumbent in Presidential Elections*.
- Gibson, E., Calvo, E., & Falletti, T. (2004). *Reallocative Federalism: Overrepresentation and Public Spending in the Western Hemisphere*.
- Gibson, E., & Falletti, T. (2007). *La unidad a palos: Conflicto regional y los orígenes del federalismo argentino*.
- Gomez B., & Wilson, J. (2001). *Political Sophistication and Economic Voting in the American Electorate*. *American Journal of Political Science* 45.
- González, L. (2012). *The Redistributive Effects of Centralization and Decentralization across Subnational Units*. *Latin American Research Review* 47, 109-133.
- González, L. (2014). *El poder de los gobernadores. Conceptualización y análisis comparado de Argentina y Brasil*. Sociedad Argentina de Análisis Político 8, 339-373.
- Graham, J., & Bruhn, J. (2008). *In Praise of Taxes: The Link between Taxation and Good Governance in a First Nations Context*. Aboriginal Governance Publications.
- Greene, W. (2008). *Econometric Analysis*. New York University, Prentice Hall.
- Hansen, S. (1999). *Life Is Not Fair: Governors' Job Performance Ratings and State Economies*. *Political Research Quarterly* 52, 167-188.
- Hausman, J. (1978). *Tests in Econometrics*. *Econometrica* 46, 1251-1271.
- Healy, A., Hill, S., & Lenz, G. (2012). *Sources of Bias in Retrospective Decision Making: Experimental Evidence on Voters' Limitations in Controlling Incumbents*. *American Political Science Review* 106, 720-741.
- Healy, A., & Lenz, G. (2014). *Substituting the End for the Whole: Why Voters Respond Primarily to the Election-Year Economy*. *American Journal of Political Science* 58, 31-47.
- Holbrook, T. (1987). *National Factors in Gubernatorial Elections*. *American Politics Research* 15, 471-483.
- Hooghe, L., Marks, G., Schakel, A., Osterkat, S., Niedzwiecki, S., & Shair-Rosenfield, S. (2016). *Measuring Regional Authority: A Postfunctionalist Theory of Governance, Volume I*. Oxford University Press.
- Howell, E., & Vanderleeuw, J. (1990). *Economic Effects On State Governors*. *American Politics Quarterly* 18. 158–168.
- Hsiao, C. (2003). *Analysis of Panel Data*. Cambridge University Press.
- Isuani, A. (2014). *The Argentine welfare state: enduring and resisting change*. *International Journal of Social Welfare* 19, 104–114.
- Isuani, A. (2015). *Capitalismo versus Democracia*. Universidad de Buenos Aires.
- Jerome, B., & Lewis-Beck, M. (1999). *Is local politics local? French evidence*. *European Journal of Political Research* 35, 181-197.

- Jerome, B., & Speziari, V. (2000). *The 1998 French regional elections: why so much political instability?* Electoral Studies 19, 219-236.
- Jones, M., Meloni, O., & Tommasi, M. (2012). *Voters as Fiscal Liberals. Incentives and Accountability in Federal Systems.* Economics and Politics 24, 135-156.
- Kayser, M., & Peress, M. (2012). *Benchmarking across Borders: Electoral Accountability and the Necessity of Comparison.* American Political Science Review 106, 661-684.
- Key Jr., V. (1966). *The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, 1936-1960.* Cambridge University Press.
- Kiewiet, D. (1983). *Macroeconomics and Micropolitics: The Electoral Effects of Economic Issues.* University of Chicago Press.
- Kinder, D., & Kiewiet, D. (1981). *Sociotropic Politics: The American Case.* British Journal of Political Science 11, 129-161.
- King, J. (2001). *Incumbent Popularity and Vote Choice in Gubernatorial Elections.* The Journal of Politics 63, 585-597.
- King, J., & Cohen, J. (2005). *What Determines a Governor's Popularity?* State Politics & Policy Quarterly 5, 225-247.
- Kone, S., & Winters, R. (1993). Taxes and Voting: Electoral Retribution in the American States. *The Journal of Politics*, 55(1), 22-40.
- Kramer, G. (1971). *Short-Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior, 1896-1964.* American Political Science Review 65, 131-143.
- Kramer, G. (1983). *The Ecological Fallacy Revisited: Aggregate-versus Individual-level Findings on Economics and Elections, and Sociotropic Voting.* The American Political Science Review 77, 92-111.
- Lanoue, D., (1994). *Retrospective and Prospective Voting in Presidential-Year Elections.* Political Research Quarterly 47, 193-205.
- Ledesma, T. (2020). *El voto económico y su impacto en la gestión pública local.* Universidad de San Andrés.
- Leigh, A. (2004). *Does the World Economy Swing National Elections?* Centre for Economic Policy Research.
- Leiras, Marcelo. (2006). *Parties, provinces, and electoral coordination: a study on the determinants of party and party system aggregation in Argentina, 1983-2005.* University of Notre Dame.
- Leiras, M., (2007). *Todos los Caballos del Rey: los Partidos Políticos y el Gobierno Democrático de la Argentina, 1995-2003.* Prometeo.
- Lewis-Beck, M., & Nadeau, R., (2009). *Obama and the Economy in 2008.* Political Science & Politics 42.
- Lewis-Beck, M., & Nadeau, R., (2011). *Economic Voting Theory: Testing New Dimensions.* Electoral Studies 30.
- Lewis-Beck, M., & Paldam, M. (2000). *Economic Voting: An Introduction.* Electoral Studies. 19, 113-121.
- Lewis-Beck, M., & Stegmaier, M. (2000). *Economic Determinants of Electoral Outcomes.* Annual Review of Political Science 3, 183-219.
- Lewis-Beck, M., & Stegmaier, M., (2013). *The VP-Function Revisited: A Survey of the Literature on Vote and Popularity Functions after over 40 Years.* Public Choice 157, 367-385.
- Lewis-Beck, M., & Stegmaier, M. (2008). *The Economic Vote in Transitional Democracies.* Journal of Elections, Public Opinion & Parties 18, 303-323.
- Lewis-Beck, M., & Stegmaier, M. (2019). *Economic Voting.* Oxford Handbooks of Public Choice Volume I.
- Linn, S., Nagler, J., & Morales, M. (2010). *Economics, Elections and Voting Behavior.*
- Lodola, G. (2013). *El votante argentino.* Sociedad Argentina de Análisis Político 7, 379-388.
- Lodola, G., & Seligson, M. (2013). *Cultura política de la democracia en Argentina y las Américas: hacia la igualdad de oportunidades.* CIPPEC & Lapop.
- Lowry, R., Alt, J., & Ferree, K. (1998). *Fiscal Policy Outcomes and Electoral Accountability in American States.* The American Political Science Review 92, 759-774.
- Lucardi, A., & Almaraz, G. (2017). *With a little help from the Opposition? Relaxing term limits in the Argentine Provinces 1983-2017.* Journal of Politics in Latin America 9, 3 49-90.
- Magaloni, B., Díaz-Cayeros, A., & Estévez, F. (2007). *Clientelism and Portfolio Diversification: A Model of Electoral Investment with Application to Mexico.* En Kitschelt & Wilkinson *Patrons, Clients, and Policies? Patterns of Democratic Accountability and Political Competition.* Cambridge University Press.
- Manin, B., Przeworski, A., & Stokes, S. (1999). *Democracy, Accountability, and Representation.* Cambridge University Press.
- Mattei, F., & Weisberg, F. (1994). *Presidential Succession Effects in Voting.* British Journal of Political Science, 24(4), 495-516.

- McMann, K. (2006). *Economic Autonomy and Democracy: Hybrid Regimes in Russia and Kyrgyzstan*. Cambridge University Press.
- Miller, A., & Wattenberg, M. (1985). *Throwing the Rascals Out: Policy and Performance Evaluations of Presidential Candidates, 1952–1980*. *American Political Science Review* 79, 359-372.
- Murillo, V., Oliveros V., & Vaishnav M., (2010). *Electoral Revolution or Democratic Alternation?* *Latin American Research Review* 45, 87-114.
- Mustapic, A., Scherlis, G., & Page, M. (2011). *De colectoras, espejos y otras sutilezas. Claves para avanzar hacia una oferta electoral más transparente*. CIPPEC.
- Nadeau, R., & Lewis-Beck, M. (2001). *National Economic Voting in U.S. Presidential Elections*. *The Journal of Politics* 63, 159-181.
- Nadeau, R., Lewis-Beck, M., Belanger, E., Didier, T., & Ratto, M. (2015). *Rendición de cuentas en las democracias en desarrollo: el votante latinoamericano*.
- Nadeau, R., Ratto, M., Lewis Beck, M., Bélanger, E., & Gélinau, F. (2015). *Economía y elecciones en Argentina: las dimensiones clásica, posicional y patrimonial de la teoría del voto económico*. *Sociedad Argentina de Análisis Político* 9, 235-266.
- Nadeau, R., Belanger, E., Lewis-Beck, M., Turgeon, M., Gélinau, F., & Ratto, M. (2018). *Elecciones Latinoamericanas: selección y cambio de voto*. *Diversitas* 24.
- Nannestad, P., & Paldam, M. (1994). *The VP-Function: A Survey of the Literature on Vote and Popularity Functions After 25 Years*. *Public Choice* 79, 213-245.
- Nannestad, P., & Paldam, M. (2003). *The cost of ruling: a foundation stone for two theories*. En Dorussen & Taylor (Eds.) *Economic Voting*.
- Niemi, R., Stanley, H., & Vogel, R. (1995). *State Economies and State Taxes: Do Voters Hold Governors Accountable?* *American Journal of Political Science* 39, 936-957.
- Norpoth, H., (1996). *The Economy*. En LeDuc, Niemi & Norris, (Eds.) *Comparing democracies: Elections and voting in global perspectives*.
- Norpoth, H. (2003). *On a short leash: term limits and the economic voter*. En Dorussen & Taylor (Eds.) *Economic Voting*.
- Novaes, L., & Schiumerini, L. (2021). *Commodity Shocks and Incumbency Effects*. *British Journal of Political Science*.
- Oates, W. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism*. *Journal of Economic Literature* 37, 1120-1149.
- O'Donnell, G. (1998). *Horizontal accountability in new democracies*. *Journal of Democracy* 9, 112–126.
- Oganesyan, R. (2015). *Revisiting Egotropic Voting: Evidence from Latin America & Africa*. *Western Political Science Association*.
- Oliveros, V., & Scherlis, G. (2004) *¿Elecciones concurrentes o elecciones desdobladas?: La manipulación de los calendarios electorales en la Argentina, 1983-2003*.
- Oliveros, Virginia. (2021). *Working for the Machine: Patronage Jobs and Political Services in Argentina*. *Comparative Politics*. 53. 381-402.
- Orth, D. (2001). *Accountability in a Federal System: The Governor, the President, and Economic Expectations*. *State and Politics Quarterly*, Winter 2001.
- Palanza, V., Scartascini, C., & Tommasi, M. (2012). *On the institutionalization of Congress(es) in Latin America and beyond*. *InterAmerican Development Bank*.
- Paparo, A., (2017). *Valence and Positional Economic Voting: A Comparison Across Major Democracies*.
- Partin, R. W. (1995). *Economic Conditions and Gubernatorial Elections: Is the State Executive Held Accountable?* *American Politics Quarterly* 23, 81–95.
- Peltzman, S. (1987). *Economic Conditions and Gubernatorial Elections*. *American Economic Review* 77, 293-297.
- Pitkin, H. (1972). *The Concept of Representation*. *University of California Press*.
- Plumper, T., & Troegel, V. (2007). *Efficient Estimation of Time-Invariant and Rarely Changing Variables in Finite Sample Panel Analyses with Unit Fixed Effects*. *Political Analysis* 12, 124-139.
- Powell, G., & Whitten, D. (1993). *A Cross-National Analysis of Economic Voting: Taking Account of the Political Context*. *American Journal of Political Science* 37, 391-414.
- Prud'homme, R. (1995). *The Dangers of Decentralization*. *The World Bank Research Observer* 10, 201–220.
- Ratto, M., & Lewis-Beck, M. (2013). *Economic Voting in Latin America: A General Model*. *Electoral Studies*.
- Reynoso, D. (2004). *Las desventajas del Doble Voto Simultaneo: Argentina en perspectiva comparada*. *Perfiles Latinoamericanos* 24.
- Remmer, K. (1991). *The Political Impact of Economic Crisis in Latin America in the 1980s*. *The American Political Science Review* 85, 777-800.

- Remmer, K., & Gélinau, F. (2003). *Referendum Voting in Argentina, 1983-1999*. *Comparative Political Studies*, 36, 801-821.
- Remmer, K., & Wibbels, E. (2000). *The Subnational Politics of Economic Adjustment: Provincial Politics and Fiscal Performance in Argentina*. *Comparative Political Studies* 33, 419-51.
- Riba, C., & Diaz, A. (2003) Economic voting in subnational government: Catalanian evidence. En Dorussen & Taylor (Eds.) *Economic Voting*.
- Riera, P., Gómez, R., Barberá, P., Mayoral, J., & Montero, J. (2016). *Elecciones municipales en España: un análisis multinivel de los determinantes individuales y contextuales del voto*. *Revista de Estudios Políticos* 172, 47-82.
- Riker, W. (1964). *Federalism: Origin, Operation, Significance*. Boston, Little Brown.
- Rodden, J. (2005). *Hamilton's Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism*. Cambridge University Press.
- Rodden, J., & Wibbels, E. (2002). *Beyond the Fiction of Federalism: Macroeconomic Management in Multitiered Systems*. *World Politics* 54, 494-531.
- Rodden, J., & Wibbels, E. (2011). *Dual Accountability and the Nationalization of Party Competition: evidence from four federations*. *Party Politics* 17, 629-653.
- Ross, M. (2001). *Does Oil Hinder Democracy?* *World Politics* 53, 325-361.
- Saiegh, S. (2010) *¿Jugadores activos o apéndices del ejecutivo?* *Política y Gobierno* 17, 3-24.
- Samuels, D., & Snyder, R. (2001). *The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective*. *British Journal of Political Science* 31, 651-671.
- Samuels, D. (2004). *Presidentialism and Accountability for the Economy in Comparative Perspective*. *The American Political Science Review* 98, 425-436.
- Schiumerini, L., & Page, M. (2012). *El efecto cancha inclinada: ventajas del oficialismo en la política de las provincias argentinas*. CIPPEC.
- Seira, I., (2020). *Obra pública y reelección de ejecutivos subnacionales: el caso de la Provincia de Buenos Aires 2011- 2015*. Universidad Nacional de San Martín.
- Shah, A., (2006). *Fiscal Decentralization and Macroeconomic Governance*. World Bank.
- Simon, D., (1989). *Presidents, Governors, and Electoral Accountability*. *Journal of Politics* 51, 286-304.
- Simon, D., Ostrom, C., & Marra, R. (1991). *The President, Referendum Voting, and Subnational Elections in the United States*. *The American Political Science Review* 85, 1177-1192.
- Singer, M. (2013). *Economic Voting in an Era of Non-Crisis: The Changing Electoral Agenda in Latin America, 1982-2010*. *Comparative Politics* 45, 169-185.
- Singer, M., & Carlin, R. (2013). *Context Counts: The Election Cycle, Development, and the Nature of Economic Voting*. *The Journal of Politics* 75, 730-742.
- Stegmaier, M., & Lewis-Beck, M. (2007). *Economic Models of Voting*. Oxford Handbooks.
- Stein, R. (1990). *Economic Voting for Governor and U. S. Senator: The Electoral Consequences of Federalism*. *The Journal of Politics* 52, 29-53.
- Stein, E., Tommasi, M., Echebarría, K., Lora, E., & Payne, M. (2006). *The politics of policies. Economic and Social Progress Report*. InterAmerican Development Bank.
- Stevenson, R. (2003). *The Economy as Context: Indirect links between the economy and voters*. En Dorussen & Taylor (Eds.) *Economic Voting*.
- Stock, J., & Watson, M. (2010). *Introduction to Econometrics*. Addyson-Wesley Series in Economics.
- Stokes, D., (1963). *Spatial Models of Party Competition*. *The American Political Science Review* 57, 368-377.
- Stokes, S. (2001). *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America*. Cambridge University Press.
- Stokes, S., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013) *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. Cambridge University Press.
- Svoboda, C. J. (1995). *Retrospective Voting in Gubernatorial Elections: 1982 and 1986*. *Political Research Quarterly* 48, 135-150.
- Tagina, M. (2012). *Controlando al gobierno a través de las urnas. Un análisis del caso argentino entre 1995 y 2005*. *Revista Política* 50.
- Ter-Minassian, T. (1997). *Fiscal federalism in theory and practice*. International Monetary Fund.
- Tiebout, C. (1956). *A Pure Theory of Local Expenditures*. Northwestern University.
- Tilley, J., & Hobolt, S. (2011). *Is the Government to Blame? An Experimental Test of How Partisanship Shapes Perceptions of Performance and Responsibility*. *The Journal of Politics* 73, 1-15.

- Tomassi M., Saiegh S., & Sanguinetti P. (2001). *Fiscal Federalism in Argentina: Policies, Politics, and Institutional Reform*. Economía.
- Torres-Reyna, O. (2010). *Getting Started in Fixed/Random Effects Models*. Princeton University.
- Treisman, D. (2000). *Decentralization and Inflation: Commitment, Collective Action, or Continuity*. The American Political Science Review 94, 837-857.
- Tufte, E., (1978). *Political Control of the Economy*. Princeton University Press.
- Valdini, M., & Lewis-Beck, M. (2018). *Economic Voting in Latin America: Rules and Responsibility*. American Journal of Political Science 62, 410-423.
- Waisbord, S. (2020) *¿Es válido atribuir la polarización política a la comunicación digital? Sobre burbujas, plataformas y polarización afectiva*. Revista SAAP.
- Warshaw, C., (2017). *Economic Voting in Gubernatorial Elections*. UCLA American Politics Workshop.
- Weingast, B. (1995). *The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development*. Journal of Law, Economics & Organization, 1-31.
- Wibbels, E. (2005). *Federalism and the Market: Intergovernmental Conflict and Economic Reform in the Developing World*. Cambridge University Press.
- Wilkin, S., Haller, B., & Norpoth, H. (1997). *From Argentina to Zambia: a World-Wide Test of Economic Voting*. Electoral Studies 16, 301-316.
- Williams, R. (2018). *Fixed Effects vs. Random Effects Models*. University of Notre Dame.
- Wolfers, J. (2002). *Are Voters Rational? Evidence From Gubernatorial Elections*. SSRN Electronic Journal.
- Wooldridge, J. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press.
- Zucco, C., & Campello, D. (2015). *Presidential Success and the World Economy*.

Fuentes

Atlas Electoral, Blog de Andy Tow (2021). Elecciones nacionales y provinciales en Argentina. Extraído de <https://www.andytow.com/atlas/totalpais/>

Banco Mundial (2021). PBI, UMN a precios constantes. Extraído de <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KN?locations=AR>

Banco Mundial (2021). Inflación anual. Extraído de <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?end=2020&locations=AR&start=1961>

Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=133>

Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/economia/cuentas-provinciales/pbg-2004>

Dirección de Estadística de la Provincia de Córdoba (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/pgb>

Dirección de Estadística de la Provincia de Corrientes (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://estadistica.corrientes.gob.ar/publicacion/corrientes-en-cifras-2020-51>

Dirección de Estadística de la Provincia de Chaco (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://gobiernoabierto.chaco.gob.ar/estadisticas/>

Dirección de Estadística de la Provincia de Chubut (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de https://www.estadistica.chubut.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=569

Dirección de Estadística de la Provincia de Entre Ríos (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://www.entrierios.gov.ar/dgec/>

Dirección de Estadística de la Provincia de Jujuy (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <http://dipec.jujuy.gob.ar/indicadores-economicos/producto-bruto-geografico/>

Dirección de Estadística de la Provincia de La Rioja (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://estadistica.larioja.gov.ar/index.php/publicaciones/15-pbg>

Dirección de Estadística de la Provincia de Mendoza (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://deje.mendoza.gov.ar/#/>

Dirección de Estadística de la Provincia de Misiones (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://ipecmisiones.org/category/economia/cuentas-provinciales/anuario/>

Dirección de Estadística de la Provincia de Neuquén (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/#/pbg_base_2004

Dirección de Estadística de la Provincia de Rio Negro (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://estadisticaycensos.rionegro.gov.ar>

Dirección de Estadística de la Provincia de San Juan (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <https://web.sanjuan.gob.ar/iiee/wp-content/uploads/sites/9/2021/02/PBG-Publicacion-IIIEE-Noviembre-2019-Web.pdf>

Dirección de Estadística de la Provincia de Salta (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <http://estadisticas.salta.gov.ar/web/archivos/pbg/pbg2012.pdf>

Dirección de Estadística de la Provincia de Santa Fe (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <http://www.estadisticasantafe.gob.ar/wp-content/uploads/sites/24/2021/03/PBGSF-0321.pdf>

Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de <http://estadistica.tucuman.gov.ar/index.php/2015-01-27-12-06-02/2015-01-27-12-59-51>

Dirección de Estadística de la Provincia de Tierra del Fuego (2021). Producto Bruto Geográfico. Extraído de https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/Anuario_2014.pdf

Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (2021). Recursos tributarios provinciales. Extraído de <https://www.economia.gob.ar/dnap/recursos.html>

Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (2021). Ejecuciones presupuestarias provinciales. Extraído de <https://www.economia.gob.ar/dnap/ejecuciones.html>

Dirección Nacional Electoral (2021). Resultados y estadísticas. Extraído de <https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas>

Dirección Nacional Electoral (2014). Recorriendo las elecciones de 1983 a 2013. Extraído de <https://recorriendo.elecciones.gob.ar/principal.html>

Economist Intelligence Unit, The Economist Group (2021). Democracy Index. Extraído de <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/>

Fundación Norte y Sur (2021). Dos siglos de economía argentina, provincias. Extraído de <https://dossiglos.fundacionnorteysur.org.ar/series/provincias>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2021). Mercado de trabajo. Extraído de <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-58>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2021). Mercado de trabajo. Extraído de <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-60>

Ministerio de Economía (2021). Informes productivos provinciales. Extraído de <https://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/informes-productivos>

Ministerio de Economía (2019). Información económica provincial y municipal. Extraído de <http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/InformesSinteticos.php>

Observatorio Electoral Argentino, CIPPEC (2021). Cuadernos Electorales. Extraído de <https://oear.cippec.org/category/novedades/cuadernos-electorales/>

Observatorio Electoral Argentino, CIPPEC (2021). Reglas electorales por provincia. Extraído de <https://oear.cippec.org/reglas-electorales/>

Observatorio Político Electoral, Ministerio del Interior (2021). Normativa provincial comparada. Extraído de <https://www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/analisis/normativacomparada>

Polity IV Project, Center for Systemic Peace (2014). Political Regime Characteristics and Transitions . Extraído de <http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm>

Anexo

Buenos Aires

En 1987 el del oficialismo fue Juan Manuel Casella, que perdió.

En 1991 Cafiero no podía presentarse y el candidato fue Eduardo Duhalde, que ganó.

En 1995 Duhalde logró su reelección.

En 1999 el candidato oficialista fue el vicepresidente Carlos Ruckauf, que también ganó.

En 2003 Felipe Solá (vicegobernador que asumió por Ruckauf) fue por la reelección y ganó.

En 2007 el candidato de Solá fue Daniel Scioli, vicepresidente de Néstor Kirchner 2003-2007. Ganó.

En 2011 Scioli logro la reelección.

En 2015 el candidato fue Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Scioli, que perdió con María Eugenia Vidal.

En 2019 Vidal fue por su reelección y perdió con Kicillof.

Ciudad de Buenos Aires

En el 2000 Olivera, que había asumido tras la elección de Fernando de la Rúa como presidente, decidió no postularse para su reelección sino que lo hizo para legislador. El candidato fue Aníbal Ibarra, que ganó.

En 2003 Ibarra buscó la reelección y la consiguió.

En 2007 Jorge Telerman, que había asumido por ser vicegobernador de Ibarra –destituido por juicio político en 2006– fue por la reelección y perdió con Mauricio Macri.

En 2011 Macri fue por la reelección y ganó.

En 2015 el candidato de Macri fue su jefe de campaña y ministro de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que ganó.

En 2019 Rodríguez Larreta fue por la reelección y ganó.

Catamarca

En 1987 el candidato del gobernador Ramón Saadi fue su padre, Vicente Saadi, que ganó.

En 1988 Garbe (vicegobernador de Vicente Saadi que asumió tras su muerte) llamo a elecciones y se postuló como candidato a vicegobernador de Ramón Saadi. Ganaron.

En 1991 Ramón Saadi fue por su reelección y perdió con Arnoldo Castillo.

En 1995 Castillo fue por su reelección y ganó.

En 1999 Arnoldo Castillo postulo a su hijo, Oscar Castillo, que ganó.

En 2003 el candidato oficialista fue Eduardo Brizuela del Moral, que llevo como candidato a vicegobernador en su fórmula al mismo vicegobernador saliente, Hernán Colombo, y ganó.

En 2007 Brizuela logro la reelección gracias al apoyo del kirchnerismo (era uno de los *radicales K*).

En 2011 Brizuela fue por otro mandato y perdió con quien fue su vicegobernadora, Lucia Corpacci, que esta vez fue separada como candidata del kirchnerismo.

En 2015 Corpacci fue por la reelección y gano.

En 2019 el candidato de Corpacci fue Raúl Jalil, intendente de la capital provincial entre 2011-2019. Ganó.

Chaco

En 1987 el gobernador Tenev no podía presentarse, pero el oficialismo gano con Danilo Baroni.

En 1991 el candidato oficialista fue Jorge Morales, que perdió con José Tauguinas.

En 1995 el candidato oficialista fue José Ruiz Palacios. Perdió con Ángel Rozas.

En 1999 el gobernador Rozas fue por su reelección y ganó.

En 2003 ganó Roy Nikisch, vicegobernador y ex-ministro de gobierno de Rozas.

En 2007 el candidato volvió a ser Rozas, que perdió con Jorge Capitanich.

En 2011 Capitanich logro la reelección.

En 2015 el candidato oficialista fue Domingo Peppo, ministro de gobierno de Capitanich. Llevó en la fórmula como vicegobernador a Daniel Capitanich, hermano de Jorge. Ganaron.

En 2019 el candidato volvió a ser Jorge Capitanich, que ganó.

Chubut

En 1987 el candidato oficialista fue Manuel Migliaro, que perdió con Néstor Perl.

En 1991 el candidato oficialista fue Carlos Maestro, que ganó.

En 1995 Maestro logro su reelección.

En 1999 el candidato oficialista fue José Luis Lizurume, ministro del gobernador Carlos Maestro.

En 2003 el gobernador Lizurume fue por la reelección y perdió con Mario Das Neves.

En 2007 Das Neves fue por la reelección y ganó.

En 2011 el ganador fue Martin Bussi, ministro de producción de Das Neves e intendente de Comodoro Rivadavia.

En 2015 Bussi fue por la reelección y perdió con Das Neves. Ambos se habían distanciado políticamente.

En 2019 el gobernador Arcioni, vicegobernador de Das Neves que asumió tras su muerte, ganó la reelección.

Córdoba

En 1987 el gobernador Angeloz logro su reelección habilitado por una reforma constitucional exitosa.

En 1991 Angeloz fue por otra reelección y ganó.

En 1995 Angeloz no podía reelegirse y el candidato oficialista fue Ramón Mestre, que ganó.

En 1999 Mestre fue por su reelección y perdió con José Manuel de la Sota.

En 2003 de la Sota gano su reelección.

En 2007 el candidato fue Juan Schiaretti, vicegobernador de José Manuel de la Sota. Ganó.

En 2011 el oficialismo volvió a ganar con José Manuel de la Sota.

En 2015 el oficialismo volvió a ganar con Schiaretti.

En 2019 Schiaretti consiguió la reelección.

Corrientes

En 1987 el candidato oficialista fue Ricardo Leconte, del Pacto Autonomista Liberal. Ganó.

En 1991 ganó el oficialista Raúl Romero Feris.

En 1997 el candidato oficialista del Pacto (que volvió a ganar en 1993 con Raúl Romero Feris luego de la intervención federal) fue Carlos Tomasella, que perdió.

En 2005 el candidato oficialista fue Arturo Colombi, primo del gobernador Ricardo Colombi (que había ganado en 2001 para la UCR luego de la intervención federal).

En 2009 Arturo Colombi fue por la reelección pero perdió con su primo Ricardo después de haberse distanciado políticamente cuando Arturo se alineó con el gobierno nacional peronista de Cristina Kirchner como parte de los *radicales K*.

En 2013 Ricardo Colombi ganó la reelección.

En 2017 el candidato fue Gustavo Valdés, ministro de gobierno de Ricardo Colombi.

Entre Ríos

En 1987 el candidato oficialista fue Ricardo Lafferriere, que perdió con Jorge Pedro Busti.

En 1991 Busti no podía presentarse por límites constitucionales e impulsó a Mario Moine, que ganó.

En 1995 Moine no podía presentarse por las mismas razones y el oficialismo ganó con Busti.

En 1999 Busti tampoco podía presentarse y apoyó a Héctor Maya, que perdió con Sergio Montiel.

En 2003 el candidato oficialista fue Sergio Varisco, que perdió con Jorge Pedro Busti.

En 2007 el candidato fue Sergio Urribarri, ministro de gobierno y justicia de Busti.

En 2011 Urribarri logro la reelección.

En 2015 la formula oficialista la integraron dos ministros de la gestión de Urribarri: Gustavo Bordet (ministro de salud y acción social) como gobernador, y Adrián Bahl (ministro de gobierno y justicia) como vicegobernador. Ganaron.

En 2019 Bordet logro la reelección.

Formosa

En 1987 el candidato oficialista fue Vicente Joga, que ganó.

En 1991 Joga logro su reelección.

En 1995 Joga no podía presentarse y candidateó a su vicegobernador, Gildo Insfrán, que ganó.

En 1995 Insfrán logro la reelección.

En 1999 Insfrán logro la reelección.

En 2003 Insfrán logro la reelección.

En 2007 Insfrán logro la reelección.

En 2011 Insfrán logro la reelección.

En 2015 Insfrán logro la reelección.

En 2019 Insfrán logro la reelección.

Jujuy

En 1987 el candidato oficialista fue Ricardo Aparici, que ganó.

En 1991 bajo el lema oficialista compitieron Domínguez (ganador), Snopek, y Jorge.

En 1995 Oscar Perassi, que asumió luego de las renuncias del gobernador Domínguez y su vicegobernador, Ficoseco, fue por su reelección pero su sublema perdió con el de Guillermo Snopek.

En 1999 el gobernador Eduardo Fellner (que asumió tras la muerte de Snopek y la renuncia de su vicegobernador, Ferraro) fue por la reelección y ganó.

En 2003 Fellner logro su reelección.

En 2007 ganó Walter Barrionuevo, vicegobernador de Fellner.

En 2011 volvió a ganar el oficialismo de la mano de Fellner.

En 2015 Fellner buscó la reelección y perdió con Gerardo Morales.

En 2019 Morales ganó la reelección.

La Pampa

El peronismo pampeano gobierna desde 1983 con algunas internas resueltas a través de las elecciones primarias provinciales. En 1987 el candidato del gobernador Marín fue Néstor Ahuad.

En 1991 volvió a ganar Marín

En 1995 Marín logro la reelección.

En 1999 Marín logro otra reelección.

En 2003 el peronismo pampeano retuvo la gobernación con Carlos Verna.

En 2007 el candidato oficialista fue Oscar Jorge.

En 2011 Oscar Jorge logró la reelección.

En 2015 el peronismo pampeano se mantuvo en el gobierno con Verna.

En 2019 el candidato del gobernador saliente (Verna) fue Sergio Zillotto.

La Rioja

En 1987 el gobernador Menem fue por la reelección.

En 1991 el gobernador Luis Beder Herrera (asumió luego de que Menem asuma la presidencia, Cavero muera en el cargo y Vega renunciase) fue como candidato a vicegobernador de Bernabé Arnaudo y ganó.

En 1995 Arnaudo se presentó con su sublema, pero perdió con el de Ángel Maza.

En 1999 Ángel Maza logro su reelección.

En 2003 Ángel Maza logro otra reelección.

En 2007 Beder Herrera, que asumió como gobernador ante la suspensión de Maza, ganó la reelección.

En 2011 Beder Herrera busco otro mandato y lo consiguió.

En 2015 ganó el vicegobernador de Beder Herrera, Sergio Casas.

En 2019 Casas no pudo postularse por cumplir la cantidad de mandatos permitida (incluyendo su estancia como vicegobernador). Su candidato fue Quintela, intendente de la capital provincial y exdiputado electo por las listas de Herrera y Casas.

Mendoza

En 1987 el candidato oficialista fue Raul Baglini, que perdió.

En 1991 el candidato oficialista fue Rodolfo Gabrielli, que ganó.

En 1995 el candidato oficialista fue Arturo Lafalla, que ganó.

En 1999 el candidato oficialista fue Francisco Garcia, que perdió.

En 2003 el candidato oficialista fue Julio Cobos. Ganó.

En 2007 el candidato oficialista fue César Biffi. Perdió con Celso Jaque.

En 2011 el candidato de Jaque fue Francisco Pérez, su ministro de infraestructura, vivienda y transporte. Ganó.

En 2015 el candidato de Pérez fue Adolfo Bermejo, senador nacional electo por la lista de Pérez en 2011. Perdió con Alfredo Cornejo.

En 2019 el candidato de Cornejo fue Rodolfo Suarez, intendente de la ciudad capital 2015-2019.

Misiones

En 1987 el candidato oficialista fue Mario Losada, que perdió.

En 1991 el gobernador Humada apoyó la candidatura de Ramón Puerta, que ganó.

En 1995 Puerta logro la reelección.

En 1991 el candidato oficialista fue Carlos Rovira, que ganó.

En 2003 Carlos Rovira consiguió la reelección.

En 2007 el candidato de Rovira fue Maurice Closs, su ministro de gobierno y vicepresidente de su partido.

En 2011 Closs consiguió su reelección.

En 2015 el candidato oficialista fue Hugo Passalacqua, ex-ministro de educación y cultura con Rovira y Closs (2003-2011) y vicegobernador de Closs (2011-2015).

En 2019 el candidato fue Ahuad, vicegobernador de Passalacqua.

Neuquén

En 1987 Felipe Sapag no podía reelegir y el candidato oficialista fue Pedro Salvatori, que ganó.

En 1991 el candidato oficialista fue Jorge Sobisch, con Sapag de vicegobernador. Ganaron.

En 1995 el candidato fue el vicegobernador saliente, Felipe Sapag, que ganó.

En 1999 el candidato volvió a ser Jorge Sobisch, que ganó.

En 2003 el gobernador Jorge Sobisch ganó su reelección.

En 2007 el candidato oficialista fue Jorge Sapag, ex-ministro y vicegobernador de Sobisch.

En 2011 Jorge Sapag gano su reelección.

En 2015 el candidato de Sapag fue Omar Gutiérrez, ministro de economía y obras públicas de Sapag.

En 2019 Gutiérrez gano su reelección.

Río Negro

En 1987 el candidato oficialista fue Horacio Massaccesi, que ganó.

En 1991 Massaccesi ganó su reelección.

En 1995 el candidato oficialista fue Pablo Verani, vicegobernador de Massaccesi, que ganó.

En 1999 Verani logro su reelección.

En 2003 el candidato oficialista del gobernador Verani fue Miguel Ángel Saiz. Ganó.

En 2007 Saiz busco la reelección y la consiguió.

En 2011 el candidato de Saiz fue su ministro de educación, César Barbeito, que perdió con Soria.

En 2015 el gobernador Weretilneck, que asumió tras la muerte de Soria, logro la reelección.

En 2019 la candidata oficialista fue Arabela Carreras, ministra de turismo, cultura y deportes de Weretilneck.

Salta

En 1987 el candidato oficialista fue Hernán Cornejo del PJ, que ganó.

En 1991 el candidato oficialista fue Roberto Romero (quien apoyó a Cornejo en 1987) que perdió.

En 1995 el candidato oficialista fue Jorge Folloni, apoyado por el gobernador saliente Ulloa. Perdió.

En 1999 Juan Carlos Romero logro la reelección.

En 2003 Romero logro otra la reelección.

En 2007 su vicegobernador, Walter Wayar, perdió con Juan Manuel Urtubey. Ambos eran peronistas, pero Urtubey fue quien recibió el apoyo del gobierno nacional de los Kirchner.

En 2011 Urtubey fue reelecto.

En 2015 Urtubey logró otra reelección.

En 2019 Urtubey no apoyo ningún candidato de manera oficial, pero se podría decir que indirectamente apoyo al ganador: Gustavo Sáenz. Antonio Marocco, candidato a vicegobernador, fue ministro de gobierno de Urtubey y Juan Pablo Rodríguez, jefe de campana de Sáenz, fue un hombre del equipo de Urtubey durante toda su carrera.

San Juan

En 1987 el candidato oficialista fue Carlos Gómez Centurión, que ganó.

En 1991 el candidato oficialista fue Juan Maratta, que perdió con el peronista Jorge Escobar.

En 1995 Escobar logro la reelección.

En 1999 Escobar fue por otra reelección y perdió.

En 2003 el gobernador Wbaldino Acosta fue por su reelección y salió tercero. Ganó José Luis Gioja.

En 2007 Gioja logro la reelección.

En 2011 Gioja logro otra reelección.

En 2015 Gioja postuló a su vicegobernador, Sergio Uñac, que ganó.

En 2019 Uñac logro su reelección.

San Luis

Alberto Rodríguez Saá gano en 1983 y se mantuvo hasta 2001, cuando asumió la presidencia de la nación.

En 2003 la gobernadora María Alicia Lemme (asumió ante la salida de Adolfo R. Saá) no se postuló, y el candidato fue Alberto Rodríguez Saá, hermano de Adolfo, que ganó.

En 2007 Alberto R. Saá logro su reelección.

En 2011 Alberto R. Saá, que se postulaba a la presidencia de la nación, postuló a Claudio Poggi, quien era su ministro de economía y además fue ministro de obras públicas y turismo, diputado nacional y jefe de gabinete en los periodos anteriores de los hermanos R. Saá. Ganó.

En 2015 volvió Alberto R. Saá y ganó.

En 2019 Alberto R. Saá logro una vez más reelección.

Santa Cruz

En 1987 el candidato oficialista del gobernador Puricelli fue Ricardo del Val, que ganó.

En 1991 el gobernador saliente era Marcelino García, que asumió tras el juicio político de Ricardo del Val y la renuncia de su vicegobernador, José Granero. Como no podía presentarse, el oficialismo presentó dos sublemas: Néstor Kirchner (ganador) y Arturo Puricelli (gobernador 1983-1987).

En 1995 Kirchner logro la reelección.

En 1999 Kirchner logro la reelección.

En 2003 el gobernador Néstor Kirchner jugó (y ganó) la carrera presidencial, y en la provincia lo hizo de igual manera su vicegobernador, Sergio Acevedo.

En 2007 el gobernador interino Daniel Peralta (asumió después de la renuncia de Acevedo y de su vice, Carlos Sancho) se postuló para su reelección y ganó.

En 2011 Peralta logro otra reelección.

En 2015 Peralta se postuló dentro del lema peronista-kirchnerista pero perdió con Alicia Kirchner, hermana del exgobernador y expresidente Néstor Kirchner.

En 2019 A. Kirchner logro su reelección.

Santa Fe

En 1987 el candidato ganador fue el oficialista Víctor Reviglio.

En 1991 el candidato oficialista fue Carlos Reutemann, que ganó.

En 1995 el candidato oficialista fue Obeid, que ganó.

En 1999 ganó el candidato oficialista, Reutemann.

En 2003 el candidato oficialista del gobernador Reutemann fue el diputado nacional Jorge Obeid, que ganó.

En 2007 el candidato de Obeid fue Rafael Bielsa, hermano de la vicegobernadora de Obeid, María Eugenia Bielsa, diputado nacional 2003-2007 y ministro de relaciones exteriores de Néstor Kirchner. Perdió con Hermes Binner.

En 2011 el candidato oficialista de Binner fue Antonio Bonfatti, ministro de gobierno y reforma del Estado y diputado nacional por mismo partido.

En 2015 el candidato oficialista fue Miguel Lifschitz, quien estuvo en la gestión y sucedió a Binner en la intendencia de la ciudad de Rosario (2003-2011), por la cual también fue senador provincial 2011-2015.

En 2019 el candidato fue otra vez Bonfatti, que perdió con Omar Perotti.

Santiago del Estero

En 1987 el candidato del oficialismo provincial fue el *delfín* y Ministro de Gobierno del gobernador Juárez, Cesar Iturre, que ganó.

En 1991 el oficialismo presentó dos sublemas: el del exgobernador Carlos Arturo Juárez y el de Carlos Aldo Mujica, que ganó.

En 1999 el gobernador Juárez se presentó a su reelección y ganó. Había vuelto al poder en 1995 después de una intervención federal.

En 2002 el gobernador Díaz (que asumió por Juárez cuando este asumió como senador nacional) ganó la reelección con Mercedes Aragonés (esposa de Juárez) como compañera de fórmula.

En 2008 el gobernador Gerardo Zamora logro la reelección. Había ganado en 2005 después de una intervención federal.

En 2013 Zamora postuló a su esposa, Claudia Ledesma Abdala, que ganó.

En 2017 el candidato oficialista volvió a ser Zamora.

Tierra del Fuego

En 1995 el gobernador Estabilo logro la reelección.

En 1999 el candidato oficialista fue Martinelli, que perdió.

En 2003 el gobernador Manfredotti fue por la reelección y perdió con Mario Jorge Colazo.

En 2007 el gobernador Cóccaro, que asumió por la destitución de Colazo, perdió con Fabiana Ríos.

En 2011 Ríos logro la reelección.

En 2015 Ríos postuló a su vicegobernador, Roberto Crocianelli, que salió tercero.

En 2019 la gobernadora electa para el periodo 2015-2019, Rosana Bertone, buscó la reelección pero perdió con Gustavo Melella.

Tucumán

En 1987 el candidato oficialista fue José Domato, que ganó.

En 1991 el candidato fue Ramón Ortega, que ganó.

En 1995 fue Olijela del Valle Rivas, que perdió con Antonio Bussi.

En 1999 el candidato de Bussi fue su hijo, Ricardo Bussi, que perdió con Julio Miranda.

En 2003 el gobernador Miranda postuló a su ministro de economía, José Alperovich.

En 2007 Alperovich fue reelecto.

En 2011 Alperovich logró otra reelección.

En 2015 el candidato oficialista fue Juan Luis Manzur, vicegobernador de Alperovich (2007-2015).

En 2019 Manzur buscó la reelección y ganó.